

La diferencia entre ser campesino y ser narcotraficante: Caso de Campesinos
cocaleros en Antioquia

LINA MARCELA BARRIENTOS MONTOYA

Trabajo de grado para optar al título de
Antropóloga

Asesor

Luis Alfonso Ramírez Vidal

Magister en Ciencias Antropológicas

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
MEDELLÍN

2018

Resumen

Este trabajo de grado busca contribuir a la comprensión de la producción de identidades y normatividades alternativas una población de Ituango, Antioquia, derivadas de la interacción con la economía cocalera de subsistencia y las normatividades dispuestas por los agentes de poder, trabajo de grado realizado en una población que tiene como práctica productiva de subsistencia el cultivo de la planta de coca. El trabajo de campo se desarrolló entre 2011 y 2012, antes de la consolidación del Proceso de Paz y la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.

A partir de la ubicación espacial, la lectura de territorio y su lugarización será posible entender los motivos de las FARC, los grupos paramilitares y el Estado colombiano para disputarse el poder local y las repercusiones en las relaciones sociales, la vida cotidiana, las prácticas productivas, el paisaje y las condiciones socioeconómicas (espacio *producido* socialmente, sociedad *producida* espacialmente).

Así mismo, los procesos identitarios son el eje para generar organización, movilización, asociación, trabajo comunitario y formas de resistencia. La organización y resistencia como medios para enfrentar la violencia, el abandono institucional, el despojo, el olvido y todo aquello relacionado con los agentes de poder, el territorio y las dinámicas que ha traído consigo la producción de la planta de coca. Como perspectiva fundamental está la escala de lectura local, que sirve como lugar de construcción de normatividades no codificadas o propias de la población, que se forman en la cotidianidad.

Se hace un acercamiento a la perspectiva dicotómica cultivo-local vs. narcotráfico-global, para contribuir a la reflexión pública acerca del papel que cumple la coca en el sostenimiento de las economías locales, a partir del entendimiento de las dinámicas sociales y económicas ligadas a los cultivos ilícitos, no solo desde una perspectiva nacional o global, sino desde una perspectiva local.

Palabras clave: espacio, lugar, territorio, territorialidad, lugarización, procesos identitarios, organización social, resistencia, simultaneidad de poderes.

Contenido

Resumen.....	2
Información general del municipio y el corregimiento	6
Ituango	6
Corregimiento de Santa Rita	7
Introducción	9
1. Lugarización	16
1.1. Espacio/lugar, espacio/territorio, espacio/territorialidad.....	16
1.2. Lugarización a través de la lectura del entorno territorial: procesos de transformación del paisaje de Santa Rita de Sinitavé, vereda El Cañón.....	20
1.2.1. Escala nacional.....	23
1.2.2. Escala regional y local.....	27
1.2.2.1. <i>Prácticas productivas y paisaje</i>	33
1.2.2.2. <i>Condiciones socioeconómicas</i>	39
1.2.2.3. <i>Relaciones sociales y vida cotidiana</i>	41
2. La producción de procesos identitarios como herramienta de resistencia	46
2.1. Organización y resistencia para enfrentar la violencia, el abandono institucional, el despojo y el olvido.....	48
2.1.1. Organización sociopolítica.....	51
2.1.2. Organización económica.....	53
2.2. Coca: erradicación y movilización.....	56
2.3. Una mirada a las formas de resistencia locales y al territorio como medio de producción de procesos identitarios y normatividades alternativas	64
3. La simultaneidad de poderes explorada desde la transformación del paisaje y las prácticas productivas: construcción de espacialidad.....	69

3.1. Transformación del paisaje: relación entre la ubicación de las prácticas productivas con la presencia de agentes armados de poder.....	69
3.2. Construcción de espacialidad.....	72
4. Un problema local mirado desde la globalidad que merece cambiar de escala para encontrar justicia. [Reflexión abierta: campesinos vs. narcos].....	76
4.1. Dinámicas desprendidas del cultivo ilícito a nivel global y nacional.....	78
4.2. Dinámicas desprendidas del cultivo ilícito a nivel local	82
4.3. Cultivo y campesino desde lo local vs. narcotráfico y narcotraficante desde lo global	84
5. Referencias bibliográficas.....	89

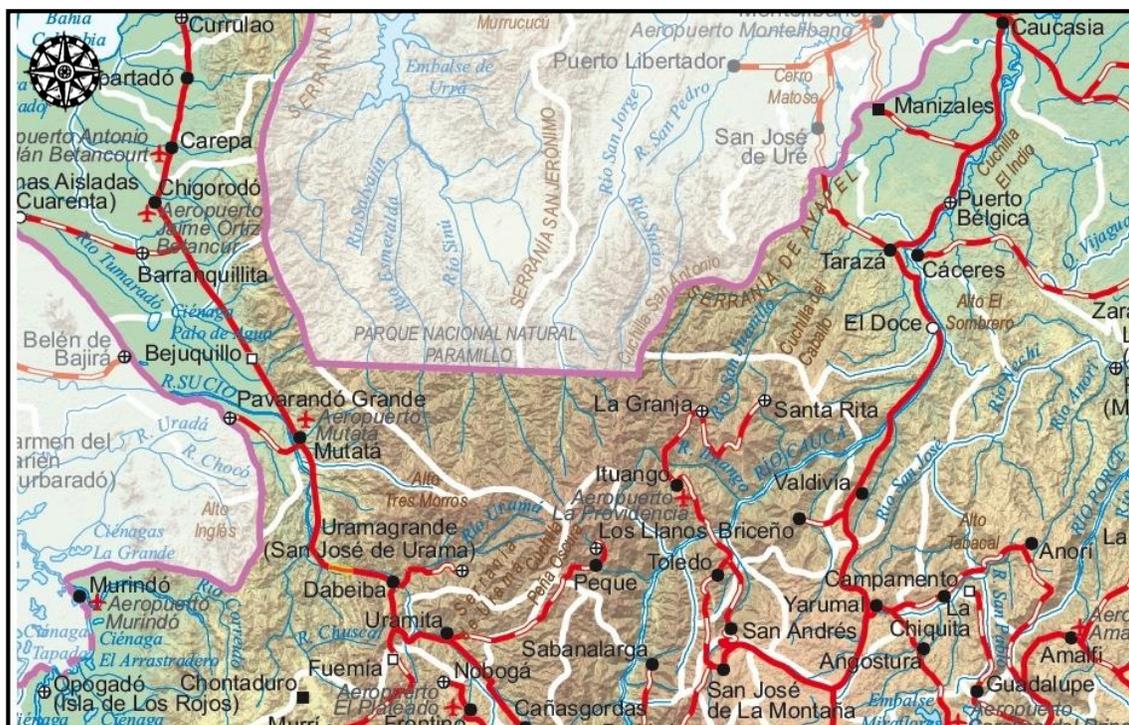
Información general del municipio y el corregimiento

A continuación se realiza una presentación del lugar en el que se desarrolla el trabajo de grado, a partir de documentación revisada como el Plan de Ordenamiento Territorial y el Atlas veredal del municipio en el departamento de Antioquia.

Ituango

El municipio de Ituango está localizado en la zona norte del departamento de Antioquia, ubicado en la margen derecha de la cordillera Occidental colombiana. Limita al norte con el departamento de Córdoba (municipios de Tierra Alta y Puerto Libertador) y en Antioquia con el municipio de Tarazá; por el nororiente con el río Cauca, el cual lo separa de los municipios de Valdivia, Briceño y Toledo; por el suroriente con Sabanalarga; por el sur con Peque y Dabeiba; y por el occidente con Mutatá. La cabecera municipal tiene una temperatura media de 21 °C y en el municipio se encuentran desde el clima caliente en las riberas del río Cauca hasta las zonas paramunas del sistema montañoso del Paramillo (alturas que oscilan entre los 300 y los 3.700 m.s.n.m.) (Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2008, p.1).

El área del municipio, según las mediciones planimétricas del equipo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, es de 3.904 km². El Parque Nacional Natural Paramillo abarca 2.144,4 km², que corresponden al 54,8% del área municipal (Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2008, p.1).



Mapa 1. Municipio de Ituango, departamento de Antioquia.

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Corregimiento de Santa Rita

Localizado en el extremo nororiental del municipio, este corregimiento cuenta aproximadamente con 1.194 habitantes en la zona urbana. Ofrece servicios como centro de salud, establecimientos educativos de primaria y secundaria, parroquia, cementerio, cancha de fútbol, placa polideportiva, y un sector comercial de desarrollo menor. Santa Rita es considerada el centro poblado más importante del municipio después de la cabecera municipal, porque, además de los servicios que se prestan en su interior, genera una atracción importante de los habitantes del sector rural hacia él. Sus actividades económicas preponderantes son la agricultura de subsistencia y la ganadería de doble propósito (Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2008, p.25).

Posee una vía de penetración de aproximadamente 68 km, que a pesar de no estar en las mejores condiciones, es el único medio de comunicación carretable con la cabecera municipal. Cuenta con el aeropuerto La Hermosa (Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2008, p.25), actualmente en servicio para la Fuerza Pública.



Mapa 2. Corregimiento de Santa Rita de Sinitavé, municipio de Ituango.
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Introducción

Este trabajo de grado se desarrolla en el municipio de Ituango, corregimiento de Santa Rita de Sinitavé, zona a la cual se llega a partir de la participación en el Proyecto de Investigación y Gestión Territorial del Programa de Electrificación Rural *Antioquia Iluminada* de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (programa de las Empresas Públicas de Medellín). Desde allí se hace posible reconocer el contexto en que habita la población de Santa Rita y posteriormente realizar el proceso investigativo que aquí se expone.

En esta zona el cultivo de planta la coca se ha convertido en un elemento dinamizador de la economía, pues es un lugar que se ve aislado a causa de la ocupación guerrillera en su esfera rural, de sus condiciones geográficas y del mal estado de las vías de acceso, lo cual hace que la comercialización y el transporte de otros posibles productos —los cuales se desagregarán más adelante—, no sea rentable por los altos costos que conllevan. Es así como desde hace aproximadamente diecisiete años se posiciona el cultivo de la coca como fuente principal de ingresos para los pobladores.

En esta medida es que comienza a generarse toda una red de poderes y agentes sociales y se abre la oportunidad para que el espacio se *produzca* socialmente pues el cultivo de coca como ente dinamizador de la economía ha transformado el paisaje rural de Santa Rita; además de que la sociedad se *produzca* espacialmente, ya que esta forma de sustento ha generado formas de movilización, asociación y trabajo comunitario (Sosa, 2012). Se habla de *producción* porque la coca forma parte fundamental del sostenimiento económico desde su cultivo y producción.

De igual forma, debe mencionarse la *producción de identidades* (Guerrero, 2002) que se enarbola, y cómo tienen que ver en la conformación de dichas identidades las relaciones históricas de poder construidas con el Estado o con los grupos armados. Estas identidades forman parte de una escala de lectura menor, la escala local que sirve como lugar de construcción de aquellas normatividades no codificadas, aquellas normatividades que se forman en la cotidianidad.

Este trabajo se enmarca en *la producción de identidades y de normatividades alternativas entre la población de Santa Rita de Sinitavé, derivadas de la interacción con la economía cocalera de subsistencia y las normatividades dispuestas por los agentes de poder*. Sin embargo, además de la práctica productiva que permite la subsistencia, es necesario expresar la importancia de otro aspecto que influye en la producción de identidades en la zona: las prácticas productivas arraigadas en la memoria campesina.

En vista de las condiciones de seguridad que requiere un trabajo de este tipo y guardando el criterio de confidencialidad y protección de los participantes, se utilizarán seudónimos o apelativos genéricos. Estos cambios se hacen necesarios dado el contexto de violencia en el que vivimos, por los condicionantes y por el estigma que recae sobre las personas que allí habitan, y por el tratamiento que convencionalmente se le ha dado al tema de investigación, como un problema criminal y no como un problema de salud pública en el caso del consumidor, o de subsistencia y ausencia estatal en el caso del cultivador. Lo anterior no invalida la veracidad de los testimonios recolectados en campo ni la autenticidad de la investigación, pues lo que interesa es

evidenciar el proceso social que sucede alrededor del cultivo de coca y no la exposición pública de personas específicas.

Además, es importante hacer hincapié sobre el papel que desempeña el campesino en este contexto de conflicto, ya que es él quien se ve inmerso en un entramado de poder que trasciende todas las escalas de lectura (global, nacional, local) y quien debe responder a diversos discursos de carácter nacional e internacional, en los que se desconoce que el cultivador es el último en la cadena productiva y es el que menos beneficios obtiene, en tanto que no forma parte de dicha cadena por voluntad o deseo de enriquecimiento, sino como una alternativa de subsistencia; por último, estos discursos también desconocen que el campesino no participa del gran negocio del procesamiento y la distribución, que es donde se percibe la alta rentabilidad de dicho negocio. Por estas razones es que se realizará una reflexión abierta que permita entender las dinámicas desprendidas de los cultivos ilícitos no solo desde esos discursos internacionales y nacionales, sino desde un discurso local, acercando la escala de lectura a la cotidianidad que se ve invisibilizada constantemente. A continuación se hará una breve descripción de los contenidos en cada uno de los capítulos que incluye este trabajo para contexto del lector.

En el capítulo de *Lugarización* (González, 2004), se presentan las huellas dejadas en la región por los distintos agentes, tanto sociales como de poder y al mismo tiempo esto se articula con la revisión bibliográfica y conceptual que orientó este trabajo. Conceptos como Espacio, Lugar, Territorio y Territorialidad serán analizados a la luz de autores como Fernando González, John Agnew, Mario Sosa Velásquez, Orlando Fals Borda, Dooren Massey, Gerardo Damonte y Vladimir Montoya.

Se hace necesario el ejercicio de lugarización para tener claridades con respecto a los procesos de transformación del paisaje que devienen de las relaciones sociales, la vida cotidiana, los cambios dados en las prácticas productivas y la presencia de agentes armados. Explorar estos factores, dará como resultado un hilo conductor que permitirá visibilizar el porqué de la problemática socioeconómica de la zona, problemática relacionada directamente con los diversos enfrentamientos y la lucha entre los grupos armados que han ostentado el poder en la historia reciente —FARC, AUC, Fuerzas Armadas Nacionales—. Para lograr esta visibilización, es necesario leer el entorno territorial y lugarizarlo, ya que a partir de la ubicación espacial de esta población será posible entender cuáles han sido los motivos de los poderosos (las FARC, los grupos paramilitares y el Estado colombiano) para disputarse el poder de la localidad y cuáles han sido las repercusiones en diferentes ámbitos, como las relaciones sociales y la vida cotidiana, las prácticas productivas y el paisaje y las condiciones socioeconómicas.

En el capítulo de *producción de procesos identitarios como herramienta de resistencia*, se usa la noción de *procesos identitarios* más que de *identidades* como tal, dado que el trabajo de campo evidenció que dichas *identidades* no están ni estarán concluidas o cerradas de forma definitiva, sino que se encuentran en una constante construcción. Se tiene en cuenta el enfoque constructivista relacional de Patricio Guerrero (2002) para analizar este tema. Al respecto, también está la postura de Eduardo Restrepo quien plantea que “*Las identidades son múltiples y constituyen amalgamas concretas*. No podemos decir que en un momento dado existe una sola

identidad en un individuo o una colectividad específica, sino que [en] un individuo se dan una amalgama, se encarnan, múltiples identidades” (2007, p.26).

Los procesos identitarios que han surgido en la población en la cual se desarrolló el trabajo, han servido como piedra angular para generar diversos tipos de organización, movilización, asociación, trabajo comunitario y diversas formas de resistencia por parte de la comunidad. Organización y resistencia para enfrentar la violencia, el abandono institucional, el despojo, el olvido y todo aquello relacionado con los agentes de poder, el territorio, y las dinámicas que ha traído consigo la producción de coca.

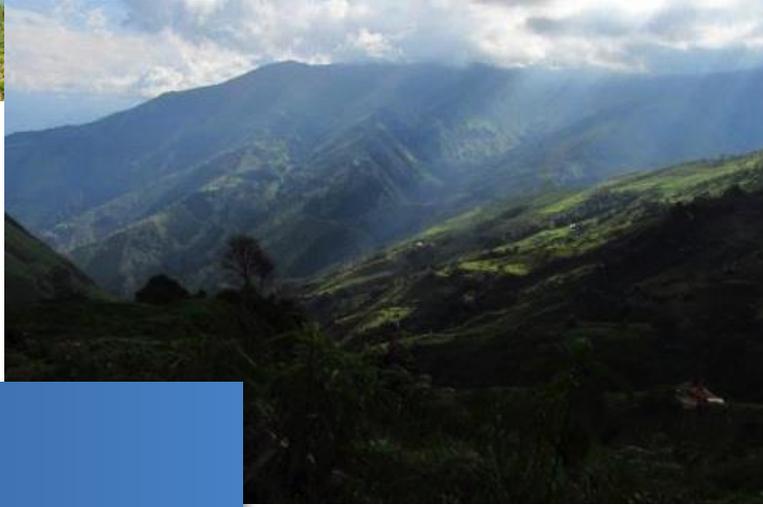
Se tendrá como perspectiva fundamental la escala de lectura local, que sirve como lugar de construcción de aquellas que se forman en la cotidianidad. Los temas estructurantes de este capítulo son: la caracterización de la población en términos sociales, económicos y políticos; la memoria de la conformación de la vereda El Cañón, de la Junta de Acción Comunal (JAC) y la asociación entre los pobladores de la zona que tienen como común denominador la producción de coca; las movilizaciones propiciadas por los procesos de erradicación de la planta de coca; la asociación y el trabajo comunitario evidenciado en las prácticas productivas y en los vecinazgos; las formas de resistencia como aquellas que condensan todo lo anterior. Este capítulo articula herramientas conceptuales de autores como Jaime Preciado Coronado, James Scott, Eduardo Restrepo, César Augusto Tapias y Antonio Gramsci.

El tercer capítulo es *Construcción de espacialidad: la simultaneidad de poderes explorada desde la transformación del paisaje y las prácticas productivas*; en él se analizarán las prácticas productivas, las cuales son diversas y su composición está mediada por la lejanía o cercanía de las veredas a las cabeceras municipales y a los

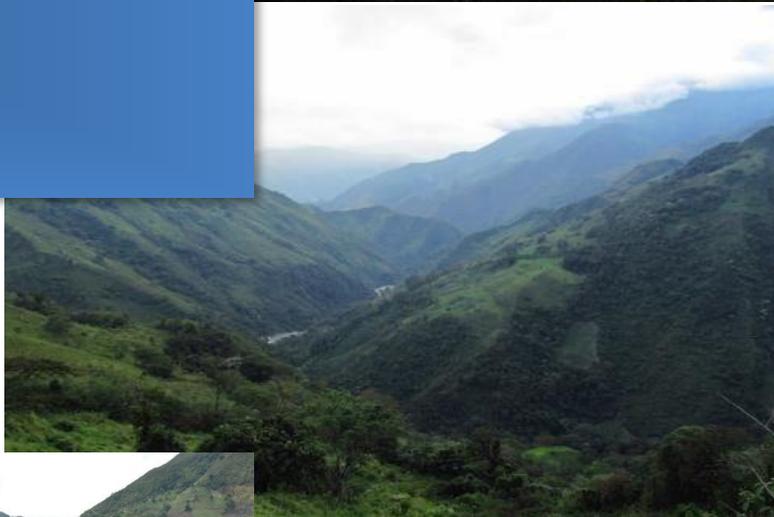
centros poblados, ello para evidenciar la simultaneidad de poderes desde la transformación del paisaje y dichas prácticas productivas.

Al mismo tiempo se intentará evidenciar cuáles son los agentes de poder que hacen presencia en la zona y cuál es su lugar de actuación, y de este modo relacionar la ubicación de las prácticas productivas con el papel que desempeñan dichos agentes y cómo entonces desde esta relación se produce un tipo de espacialidad específica. Preciado y Uc, Bentham, Damonte y Dollfus, y otros de los autores antes mencionados, apoyan teóricamente este apartado.

En el capítulo cuatro, *Un problema local mirado desde la globalidad que merece cambiar de escala para encontrar justicia [Reflexión abierta: campesinos vs. narcos]*, se hablará de cómo los agentes sociales que construyen los procesos identitarios son los pobladores que se ven inmersos en un entramado de poder, y deben responder no solo a los discursos globales sobre las problemáticas que acarrea el narcotráfico a nivel nacional y mundial, sino también a aquellos agentes armados que necesitan financiar su “causa”, y no siendo suficiente, también deben responder al imperativo incesante de sus propias necesidades básicas. Por esto último, es que en este apartado se busca entender las dinámicas desprendidas de los cultivos ilícitos, no solo desde una perspectiva nacional o global, sino desde una perspectiva local, acercando la escala de lectura a la cotidianidad, la cual casi siempre se desconoce; con base en esto, se hace un acercamiento a la perspectiva dicotómica cultivo-local vs. narcotráfico-global.



Lugarización



Imágenes de la vereda El Cañón, y de la quebrada La Chorrera. Santa Rita, Ituango, Antioquia. Archivo personal

1. Lugarización

1.1. Espacio/lugar, espacio/territorio, espacio/territorialidad

Según Francisco González, desde las ciencias geográficas la palabra lugar no solo se refiere a un sitio o pueblo, sino a las características únicas que su paisaje le otorga, siendo así una síntesis de lo humano y lo físico; sería entonces “una síntesis geohistórica concreta” (2009, p.57-58). El autor conceptualiza la palabra lugarización partiendo de esta perspectiva sobre el lugar, y de manera analógica plantea que “si la palabra globalización quiere significar todos los procesos que hacen de todo el planeta un solo espacio, la palabra lugarización quiere significar todos los procesos que revalorizan lo local” (2009, p.59). Es importante precisar que entre “localización” y “lugarización” existe una diferencia, pues el primer concepto se refiere sobre todo a procesos administrativos o actividades a nivel local desde lo empresarial o gubernamental; mientras que el concepto de lugarización evoca “una revalorización de la naturaleza de la localidad, un cambio cualitativo en el ecosistema o hábitat comunitario” (González, 2009, p.59).

La “lugarización”, es la contrapartida a esa tendencia homogeneizadora [de la globalización] y, por el contrario, busca la identidad personal y local y privilegia lo autóctono, lo vernáculo, lo natural y lo singular. Tiende a la heterogeneidad. (González, 2004, p.2)

Para poder realizar entonces una lugarización del sitio en el que se desarrolló el trabajo investigativo, es necesario hacer una revisión conjunta de varios conceptos clave, entre ellos el de *espacio*, pues en muchos casos se trata como sinónimo o incluso como extremo contrario del concepto de *lugar*, cuando en realidad es necesario

analizarlos conjuntamente para que ambos tengan sentido. Otros conceptos clave son los de *territorio* y *territorialidad*, los cuales, si bien parece que pueden usarse indiscriminadamente, también poseen una carga significativa diferente que es necesario tener presente.

Como referencia principal para los conceptos de espacio y lugar, se ha seguido a John Agnew, quien define que:

Space then signifies a field of practice or area in which a group or organization, such as a state, operates, held together in popular consciousness by a map-image and a narrative that represents it as a meaningful whole. Place represents the encounter of people with other people and things in space. It refers to how everyday life is inscribed in space and takes on meaning for people and organizations (2005, p.84).¹

Siendo así, puede entenderse que tanto el espacio como el lugar son, más que una dicotomía, una simultaneidad, dado que para que el espacio sea un campo de práctica debe existir el momento de encuentro entre las personas y las cosas a través del lugar, pues es allí donde se genera la carga significativa que se le imprime al espacio —y al mismo lugar inherentemente— a partir de la vida cotidiana. Tal y como lo menciona Mario Sosa Velásquez “El espacio [...] se construye socialmente y es transformado cotidianamente en los procesos de vida y de producción y reproducción social [...] a partir de los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que lo configuran y desde donde se co-produce” (2012, p.25).

¹ **Espacio** entonces significa un campo de práctica o un área en la que un grupo o una organización, como el Estado, opera, manteniendo unida en la conciencia popular una imagen de un mapa y una narrativa que lo representa como un todo significativo. El **lugar** representa el encuentro de las personas con otras personas y cosas en el espacio. Se refiere a cómo la vida cotidiana se inscribe en el espacio y adquiere significado para las personas y las organizaciones (Agnew, 2005, p.84).

En este sentido aporta Fals Borda que es necesario derribar la idea clásica sobre el espacio, en la que este es concebido como “una entidad de dimensiones físicas [...], que, una vez dadas, quedan estáticas o configuradas para resistir los cambios”, para “concebir el espacio como un ente flexible y variante, con impulsiones que van y vienen” (2000, p.45), y tales impulsiones evidentemente provienen de esa vida cotidiana que sucede en el lugar.

Una forma de ver cuán sinérgicos son el espacio y el lugar es la que plantea Dooren Massey, quien los expone como términos muy familiares. El espacio lo conceptualiza “como producto de relaciones, una complejidad de redes, vínculos, prácticas, intercambios tanto a nivel muy íntimo (como el del hogar) como a nivel global” (2004, p.78), y el lugar como “un nodo abierto de relaciones, una articulación, un entramado de flujos, influencias, intercambios, etc.” (2004, p.79).

Dada esta concepción más flexible y ajustable de lo que puede significar el espacio, es posible hacer una lectura más articulada con el concepto de lugar, que, si bien representa una escala de lectura más reducida, también argumenta:

[...] un nodo abierto de relaciones [...]. Es decir que la especificidad de cada lugar es el resultado de la mezcla distinta de todas las relaciones, prácticas, intercambios, etc., que se entrelazan dentro de este nodo y es producto también de lo que se desarrolle como resultado de este entrelazamiento. Es algo que yo he denominado “un sentido global de lugar”, un sentido global de lo local (Massey, 2004, p.79).

Respecto a lo anterior, es necesario resaltar el papel articulador de los grupos sociales y comunitarios sobre los conceptos en cuestión, pues dicha sinergia es

precisamente fruto de las cargas simbólicas y las acciones que estos ejercen sobre el espacio y el lugar, asimismo, son los artífices de su existencia; y al mismo tiempo, dichos espacios y lugares trascienden en aquellos grupos sociales de una forma única y específica como para determinar el tipo de símbolos y acciones que las poblaciones producirán.

Pero no solo espacio y lugar resultan ser conceptos sinérgicos, pues el territorio, a su vez, es resultado del empoderamiento de las poblaciones sobre ellos. Gerardo Damonte establece que “cuando los espacios se pueblan de símbolos se convierten en lugares: espacios reconocibles para las personas que los habitan o al menos los identifican. Cuando los espacios son apropiados y delimitados socialmente (económica, política o culturalmente) nacen los territorios” (2011, p.11).

Así como Massey y Agnew relacionan espacio y lugar, Vladimir Montoya acerca los conceptos de territorio y lugar, pues nos presenta una definición que los familiariza a ambos al expresar:

en últimas, el territorio representa el espacio adecuado en el que una comunidad ha desenvuelto su manera particular de ver y construir el mundo, por lo cual está ligado tanto al pasado como al presente y a la posibilidad del porvenir o del futuro social. En este sentido, territorio significa tanto la permanencia y la continuidad como la contingencia, el cambio y la oportunidad. (2009, p.80)

Por último, la territorialidad expresa el modo como los grupos sociales se apropian de ese espacio que habitan de manera única y específica a través de las relaciones, Montoya plantea a este respecto que:

[...] la territorialidad expresa múltiples relaciones sociales y muestra como cada colectivo establece un marco espacial que queda incluido dentro del límite soberano de un Estado, pero que no se resuelve y explica únicamente desde la lógica estatal sino que constituye un espacio de poder, de gestión y de negociación con las instituciones públicas, con otros individuos, grupos u organizaciones. De esta manera, la territorialidad es una acción que contempla la construcción social de entornos de sentido compartidos y que implica el proceso de producción del territorio. (2009, p.83-84)

1.2.Lugarización a través de la lectura del entorno territorial: procesos de transformación del paisaje de Santa Rita de Sinitavé, vereda El Cañón

Mario Sosa (2012) define la dimensión geo-eco-antrópica, la cual hace referencia al territorio como ese espacio que se construye desde la esfera social, en el cual los actores sociales intervienen y transforman, estableciendo que esta dimensión implica mirar el territorio como una especie de relación entre lo humano, la naturaleza, el espacio y el tiempo “donde el primero [el humano] ha encontrado permanentemente las condiciones y recursos para su existencia y reproducción social, como medios vitales, por medio del acceso, control y uso tanto de las realidades visibles como de las potencias invisibles que lo componen” (2012, p.14).

Así como el espacio se construye desde la esfera social, este mismo funciona como un elemento que transversaliza y hace parte de la construcción de una identidad social en particular, espacio que el sujeto asume como parte suya y se siente parte del mismo (Sosa, 2012, p.108).

En este orden de ideas, se evidenció que, en la zona específica de estudio, *el espacio se produce socialmente* ya que la población al atender a más de una autoridad que se encarga de promulgar sus normas (FARC, AUC, ejército), debe franquear estas normatividades desde la autorregulación y la movilización, y al mismo tiempo se ha visto avocado a adoptar en este espacio —voluntaria o involuntariamente— diferentes prácticas productivas, que intervienen y transforman el paisaje.

Este estudio también permitió comprender que *la sociedad se produce espacialmente*, al incluir en la perspectiva el papel que desempeña el territorio como ente dinamizador, como creador de movilización y organización comunitaria y como configurador de un paisaje biofísico y social, dadas las características específicas del lugar, teniendo en cuenta, en el caso de Santa Rita, que es la producción de la planta de coca el elemento fundamental de financiación local. Siguiendo a Sosa se puede decir entonces que:

El territorio, al mismo tiempo que es una construcción social, también constituye un configurador de identidad, imaginarios o representaciones, discursos y relaciones, pues se convierte en productor de significaciones y reglamentaciones basadas en determinados intereses e ideologías que proceden de un conjunto de afluentes: políticos, jurídicos, productivos, comerciales. En tanto contenido del saber del sujeto, configura nociones de territorialidad y abre posibilidades y limitaciones siempre dinámicas, móviles, para su uso y apropiación. (2012, p.110)

Dado este contexto, es necesario hablar de la importancia de la configuración de los territorios en relación con otros territorios, es decir de las escalas de lectura territorial.

Sosa (2012) cita a Jorge Blanco (2007, p.49), quien define que la escala

no es un patrón jerárquico preconcebido para ordenar el mundo –local, regional, nacional y global– sino que es el producto contingente de las tensiones existentes entre las fuerzas estructurales y las prácticas de los agentes locales.

El análisis de la escala se concentra, entonces, en los procesos, que modelan y constituyen las prácticas sociales en diferentes niveles de análisis. En ese sentido, la escala estaría definida por procesos sociales que se despliegan en diferentes ámbitos (o en distintos niveles) que se determinan mutuamente [...]

Los procesos sociales operan a través de escalas y no confinados en alguna de ellas en particular. (2007, p.49)

A continuación se realizará un tránsito entre diferentes escalas territoriales de lectura que posibiliten visualizar el problema de investigación, para poder realizar una lectura lugarizada que permita evidenciar los cambios sucedidos en el territorio específico, los cuales han sido propiciado por aspectos políticos, económicos, históricos, entre otros. Se definió como rango temporal de este trabajo el periodo comprendido entre finales de los años noventa y la primera década del siglo XXI. Tal y como plantea Francisco González, “como la palabra globalización define un complejo proceso de cambios planetarios, que afectan de diversas maneras a todo el mundo, así la palabra lugarización define el conjunto de cambios complejos que afectan un lugar determinado, como consecuencia de esas transformaciones planetarias” (2009, p.59).

1.2.1. Escala nacional

Con la llegada de Andrés Pastrana Arango a la presidencia (1998-2002) comenzó un proceso militar y político que le dio un viraje fundamental a lo que hoy es el conflicto armado del país, ya que es en este momento de la historia donde se evidencia una de las crestas en la línea del conflicto armado entre guerrillas y paramilitares, que tuvo como uno de sus componentes la disputa del negocio de la coca. Este hecho lo corrobora Klaus Nyholm, representante de la ODCCP (Office of Drug Control and Crime Prevention de las Naciones Unidas) al expresar que

la problemática de los cultivos ilícitos obedece a diferentes determinantes. Para el caso de las pequeñas plantaciones de cultivos de coca o amapola, el conflicto armado es esencial para explicar el crecimiento de los cultivos. Los grupos armados colombiano dependen de las drogas —no solamente por los impuestos que cobran a los traficantes, los laboratorios, las pistas de aterrizaje, etc—, “gramaje”, sino también por el control directo y la participación en el comercio local en base de coca en muchas áreas del territorio nacional donde tienen una presencia fuerte. También, la crisis agrícola de los noventa explicó el acelerado crecimiento de los cultivos de coca y amapola. El sector agropecuario fue uno de los sectores más golpeados por la implementación del modelo económico de los noventa. No se puede negar que existe una estrecha relación entre el crecimiento de los cultivos ilícitos y el comportamiento del sector agrícola colombiano. (2004, p. 621-622)

En esta época es cuando se inicia el proceso de negociación de paz entre este Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y se habilita la

llamada *Zona de Distensión* (tres municipios del departamento del Meta y uno del Caquetá) a finales de 1998. Esta zona estuvo habilitada hasta casi terminar el mandato del expresidente Pastrana, cuando este declaró que el proceso de negociación había fracasado. Dicho fracaso puede aducirse a la amplia cantidad de temas que se incluyeron para la discusión, pues la agenda que se acordó incluía entre sus puntos todas las instituciones y problemas políticos, sociales y económicos del país.

Con el presidente Pastrana inició en 1999 el llamado Plan Colombia —aún vigente— un acuerdo constituido entre el Gobierno de Colombia y los Estados Unidos, con el entonces presidente estadounidense Bill Clinton, que tuvo como objetivos primordiales crear una estrategia antinarcóticos y generar una revitalización socioeconómica, que diera como resultado el fin del conflicto armado del país (Veillette, 2005, p.2). A partir de este acuerdo, el país empezó a recibir una amplia financiación militar estadounidense, que inicialmente se vio reflejada en el crecimiento de las fuerzas policiales y, posteriormente, de las fuerzas militares (*Semana*, 2007, 22 de septiembre). Este crecimiento ha implicado un aumento del pie de fuerza, un aumento y tecnificación en el armamento, un mayor entrenamiento y la implementación de otras formas en la erradicación de los cultivos de uso ilícito —eliminación por aspersión de glifosato—.

Puede decirse también que este periodo fue en el que se dio un crecimiento exponencial de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y en el que se generaron los vínculos entre dirigentes políticos y dirigentes paramilitares, proceso que hoy se conoce como “parapolítica” (Reyes, 2009). Según uno de los informes del Human Rights Watch, “ha quedado de manifiesto que una gran cantidad de políticos colaboraron con los paramilitares, manipulando elecciones a través de la intimidación a

los votantes y el fraude, e incluso a través de las muertes de opositores políticos” (Human Rights Watch, 2005, p.22).

En el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) se inició la Política de Defensa y Seguridad Democrática², la cual propuso un desempeño participativo por parte de la sociedad, en la lucha que da el Estado y sus órganos de seguridad contra los grupos insurgentes y los grupos armados ilegales, o expresado en los términos de dicho Gobierno, en la lucha contra el terrorismo:

Reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común. (Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, 2003, p.12)

También se inició en 2003 el proceso de desmovilización de las AUC en todo el país; el cual ha generado gran controversia por la falta de claridades en su desarrollo y por el diseño ineficaz de las políticas de desmovilización, hechos que han beneficiado los desmovilizados y han ido en contra del reconocimiento y reparación a las víctimas de este grupo armado (Human Rights Watch, 2005. p.3).

A este respecto el Human Rights Watch, en su informe *¿Rompiendo el Control? Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia* (2008), evidencia gran cantidad de inconsistencias y procesos amañados que fueron en detrimento directo de las víctimas y en beneficio de este grupo armado y sus aliados:

² Los recursos del Plan Colombia fueron usados para el desarrollo de esta Política. En 2016 el acuerdo cumplió quince años y en el evento de conmemoración se denominó "Paz Colombia", entre el gobierno de Juan Manuel Santos y Barack Obama. (El Espectador, 2016)

[...] no solo los paramilitares, sino también sus cómplices, han logrado evadir sistemáticamente la investigación, el juzgamiento y la sanción. Después de que la Fiscalía General de la Nación estableció en 1995 una Unidad de Derechos Humanos especial para investigar y juzgar delitos relacionados con los derechos humanos, la unidad realizó avances significativos en una gran variedad de casos importantes que involucraban a personal del Ejército y de la Policía, paramilitares y guerrilleros. Sin embargo, como Human Rights Watch documentó en ese momento, mucho de esos casos quedaron paralizados o se cerraron luego de que en 2001 se designara al Fiscal General Luis Camilo Osorio, quien depuró a la fiscalía de varios funcionarios que habían trabajado en casos con fuertes implicancias para los derechos humanos y envió un claro mensaje a los que quedaban de que no se verían con buenos ojos los esfuerzos por procesar las violaciones de derechos humanos cometidas por oficiales del Ejército. (2002, p.5-8)

En septiembre de 2002, Se pidieron en extradición por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a Carlos Castaño y a Salvatore Mancuso, y el Departamento de Justicia del mismo país incluyó a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Castaño y otros líderes de esta organización propiciaron negociaciones de “paz” con el gobierno de Uribe para impedir su extradición. (U.S Department of State, 2001, 1 de septiembre) (U.S Department of State. 2002, 24 de septiembre) (BBC Mundo 2003, 8 de julio).

En 2005 se aprobó la ley N° 975 de 2005 (conocida como la “Ley de Justicia y Paz”), la cual fue la causante de la revictimización de quienes ya habían sufrido el flagelo del

paramilitarismo. La desmovilización les dio beneficios sin precedentes a los integrantes de las AUC, tales como penas reducidas de prisión de entre 5 y 8 años y reducción en el periodo de investigación de delitos –sesenta días-. (Human Rights Watch, 2005).

El proceso de desmovilización fue irregular, ya que el número de paramilitares que hicieron parte de este fue definido a través de las ceremonias de dejación de armas, sin embargo el Gobierno

nunca estableció un procedimiento significativo para determinar si estas personas eran efectivamente paramilitares, y no personas contratadas o invitadas para hacerse pasar por tales. Nunca los sometió a un interrogatorio serio sobre su participación en actividades delictivas ni sobre las atrocidades de las cuales podrían haber sido testigos. Si no estaban siendo investigados, el Gobierno simplemente les otorgó indultos por su participación en el grupo y les permitió ingresar en programas de reinserción patrocinados por el Gobierno. (Human Rights Watch, 2005, p.28-35).

1.2.2. Escala regional y local

El conflicto armado a nivel nacional en dicho periodo, se refleja directamente en el departamento de Antioquia y en su municipio de Ituango. La historia de los pobladores de la zona de Paramillo estuvo y ha estado directamente vinculada al surgimiento de la violencia en la región a partir de la ampliación de la frontera agraria³, expresión que se refiere a las formas y al proceso de colonización; a las crisis de la economía campesina; al papel del Estado a partir de la política agraria; a la dinámica regional del

³ Según Fajardo, “la *frontera agraria* es el espacio abierto dentro de la selva virgen para dedicarlo a las actividades agrarias”. (Fajardo, 1994, p.52)

conflicto y la movilización social; además de la presencia y participación de guerrillas, narcotraficantes y paramilitares (Fajardo, citado en Hoyos, 2006, p.16). Daniel Pécaut hace referencia al concepto de *control estratégico* como parte de las lógicas de la guerra, el cual va más allá del control de la población, y versa sobre el carácter estratégico de una posición geográfica específica y su control en términos de rutas, zonas de retaguardia o de operaciones militares, además de los recursos económicos (2004, p. 27). Dado este concepto, Pécaut también expresa que “el nudo de Paramillo como lugar ofrece el mejor ejemplo de una posición militar de valor estratégico ya que controla el paso hacia el norte antioqueño y la costa atlántica. Los paramilitares y las FARC llevan varios años enfrentándose por controlarlo” (2004, p.29).

En este contexto, se presenta la coexistencia y el conflicto entre varios agentes armados al margen de la ley. Es importante tener en cuenta que si bien las razones iniciales por las cuales aparecen y se alojan los primeros grupos armados en la zona son la marginalidad del territorio local respecto al regional y al nacional (Vásquez, 2006), la colonización y el problema agrario, no son estas las razones por las cuales aún se mantienen allí.

El conflicto nacional del periodo de Pastrana se ve precedido a escala local por dos hechos que marcaron la historia del municipio, y que fueron la antesala de muchas de las problemáticas en la zona durante aquel periodo presidencial. Estos hechos fueron la masacre del corregimiento de La Granja el 11 de julio de 1996 en la que murieron 5 personas y la masacre del corregimiento de El Aro (ambos vecinos a Santa Rita) entre octubre y noviembre de 1997. En esta última: “[murieron] 17 víctimas, quemaron 42 de las 60 viviendas [...] y forzaron a 702 habitantes a salir huyendo para salvar la vida”

(Arboleda, 2008, 21 de octubre), también se presentaron múltiples bajas presentadas a partir de enfrentamientos entre las AUC y las FARC. Por las denuncias que realizó el abogado de la región, Jesús María Valle, “sicarios de la banda La Terraza, organización criminal al servicio del narcotráfico que le hacía algunos encargos a las autodefensas, en especial, a Carlos Castaño, mataron a Valle en su oficina, la tarde del 27 de febrero de 1998” (Arboleda, 2008, 21 de octubre). Valle dijo que “debido al accionar paramilitar y su aparente connivencia con la fuerza pública ocurrieron masacres como las de El Aro y La Granja” (Arboleda, 2008, 21 de octubre)⁴.

En estos cuatro años [1994-1998] los diferentes grupos armados de paramilitares han logrado ya un proceso de relativa federalización y coordinación [...] que los ha dotado de un plan estratégico de ampliación territorial. [...] Sin duda el liderazgo parcial de Carlos Castaño ha sido fundamental en esta etapa. [...] El desarrollo contrastado de estos grupos armados ha sido relacionado por algunos con los problemas del mundo rural en los ámbitos donde nacen y se expanden tales grupos. (González *et al.*, 2003, p.66)

En esa expansión territorial se vio involucrado el municipio de Ituango, ya que en la etapa de *incursión* paramilitar uno de los objetivos era “‘liberar’, mediante la guerra, amplias zonas donde hay influencia guerrillera” (González *et al.*, 2003, p.62), influencia que se ha vivido allí desde los años sesenta. Sumado a lo anterior, las características específicas del territorio, como lo expresaba Pécaut, también fueron razones de peso para buscar el control territorial y estratégico de esta zona, búsqueda que generó un crudo conflicto que fue ganado por la guerrilla.

⁴ Las masacres y el asesinato de Jesús María Valle, han sido declarados como crímenes de lesa humanidad por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. (Semana, 2018, 3 de junio)

Ituango es un municipio que posee un territorio con alto potencial, teniendo en cuenta “su biodiversidad, de la cual se derivan servicios ambientales, tan importantes como la alimentación, los combustibles fósiles, el agua, el aire, la capacidad productiva de los suelos, usos en medicina y la estabilidad de los ecosistemas, entre otros” (Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2008, p.73). También cuenta con una ubicación geográfica relevante dentro de un corredor por el que transitan armas y drogas de uso ilícito y se ha convertido en un lugar donde existe una gran cantidad de tierra dedicada a los cultivos ilegales, específicamente la coca.

Además, este territorio es fronterizo entre las estribaciones del Paramillo —zona andina donde han estado principalmente grupos guerrilleros— y las planicies del Bajo Cauca —de dominio paramilitar—, esto hace que los habitantes de la parte oriental —corregimientos de Santa Rita, El Aro y La Granja— coexistan entre los dos modelos de poder, aunque haya un control más explícito por parte de la guerrilla, pues es esta la que determina gran parte de la normatividad dentro de las relaciones sociales de la población, y además es la que autoriza a un personal específico para la compra de la pasta base de coca producida en la región, cobrando un impuesto sobre el valor de la libra. Lo anterior evidencia su relevancia como territorio geopolíticamente determinante en los niveles local, regional y nacional.

Respecto al crecimiento elevado del conflicto armado nacional a causa de la coca en el periodo presidencial de Pastrana, se puede notar la relación de este hecho con el fenómeno local de la aparición del cultivo y procesamiento de la planta en el municipio de Ituango a mediados de los años noventa, hecho que se corrobora en el apartado de la Escala Nacional, con los argumentos de Klaus Nyholm quien expresa que “el

conflicto armado es esencial para explicar el crecimiento de los cultivos” además de que “no se puede negar que existe una estrecha relación entre el crecimiento de los cultivos ilícitos y el comportamiento del sector agrícola colombiano” (2004, p. 621-622). Por su parte, algunos habitantes relacionan la aparición del cultivo, con la llegada de las AUC a la zona, argumentando que fue este grupo el que llevó la planta al lugar (Comunicación personal, Ituango, 24 de febrero de 2012).

Para continuar con la mirada de diferentes fenómenos que incidieron sobre las realidades de los pobladores de esta zona, deben mencionarse las movilizaciones por parte de la población a causa de la erradicación de la coca impulsada a través de los apoyos financieros del Plan Colombia.

Las movilizaciones se han presentado en las subregiones Norte y Bajo Cauca de Antioquia; en 2008 fueron cuatro marchas campesinas, en las que “una comisión gubernamental facilitó el retorno tras prometer la inclusión de los marchantes en proyectos económicos que involucraban la siembra de cacao, caucho, caña y café” (Asmedas 2011, 24 de febrero). Pero al parecer dichos proyectos no tuvieron el resultado esperado, como en el caso de Santander⁵, ya que en 2011 se repite el suceso. Primero en Anorí en el mes de enero, con la participación de 5.500 campesinos; luego en Tarazá en febrero del mismo año, con la participación de 1.500 a

⁵ A este respecto es interesante advertir que aún insisten desde la Política Nacional de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo para la Consolidación Territorial en el cultivo de productos desde los cuales no puede dársele a la población una garantía de éxito en la comercialización, dado que no se contribuye realmente a la creación de centros de acopio, a las mejoras en las vías de acceso y al balanceo en las importaciones de dichos productos para que sea rentable para los productores locales. Como ejemplo se encuentran los campesinos de Santander (*Semana*. “Los campesinos que no quieren cacao” [Internet]. Consultado el 22 de abril del 2012, disponible en <http://www.semana.com/nacion/campesinos-no-quieren-cacao/175881-3.aspx>).

2.000 (Asmedas 2011, 24 de febrero) personas de El Aro, Santa Rita y otras localidades pertenecientes al Bajo Cauca (Comunicación personal, Ituango, 24 de febrero de 2012). En esta ocasión, según informó la Asociación Médica Sindical Colombiana Seccional Antioquia, Asmedas, en aquella movilización:

Mediante un comunicado, los líderes del movimiento piden el cese inmediato de la aspersion en el Bajo Cauca y el Nudo de Paramillo, la indemnización de los campesinos a los cuales, dicen, los aviones les han dañado sus huertas de pancoger y la inversión en proyectos de sustitución”. (Asmedas 2011, 24 de febrero)

Por último, se realiza otra movilización hacia Tarazá en el mes de octubre de 2011 (Monroy, 2011, 9 de octubre). Es necesario tener en cuenta, además, que a partir de la desmovilización de las AUC ha cambiado la dinámica del conflicto, pues se pasa de un bloque de poder centralizado a varios agentes sectorizados que se disputan dicho poder, presentándose entonces una transformación de la coexistencia normativa del pasado a la coexistencia actual: poderes por bloques centralizados vs. poderes múltiples enfrentados.

Esta transformación en la coexistencia normativa es posible definirla como un efecto local del contexto nacional del conflicto armado, ya que se relaciona directamente con los hechos promovidos desde las administraciones de Álvaro Uribe Vélez y su Política de Defensa y Seguridad Democrática, desde la cual se gestó la mencionada desmovilización paramilitar, el aumento del pie de fuerza y la presencia militar y policial en las cabeceras municipales (Presidencia de la República, Ministerio de Defensa

Nacional, 2003: 16), tal y como es el caso específico de Ituango y el corregimiento de Santa Rita.

La lugarización anterior es de suma importancia, en primera instancia, para entender de qué manera ha influido la ubicación espacial de la zona para ser epicentro del conflicto armado y la forma en que la población se ha empoderado del lugar y, segundo, para identificar a nivel local varios de los “efectos látigo” o repercusiones sobre la vida de la población de Santa Rita y específicamente de la vereda El Cañón respecto a dicho conflicto. Estas repercusiones se evidencian en diferentes ámbitos, tales como las prácticas productivas y el paisaje, las condiciones socioeconómicas y la seguridad alimentaria, las relaciones sociales y la vida cotidiana. Para profundizar sobre dichas repercusiones, se desagregan los siguientes apartados.

1.2.2.1. Prácticas productivas y paisaje

La contextualización expresada a lo largo del capítulo, se realizó en tanto que es necesario leer el entorno territorial, la ubicación espacial de esta población y su posición dentro del contexto político para entender cuáles han sido los motivos para disputarse el poder de la localidad. Asimismo, esta lectura sirve de ambiente para entender las implicaciones que ha tenido la presencia de agentes armados, tanto sobre las prácticas productivas y los usos de la tierra, como en las transformaciones del paisaje.

A Santa Rita su posición geográfica la convierte en blanco deseable de control, pues esta zona se ubica en un punto de paso importante para el transporte de drogas desde el Bajo Cauca. Además, su ubicación tan profunda y poco accesible, sumados al nivel de productividad de la tierra, la convierte en un lugar ideal para el cultivo de la planta de

coca y para el procesamiento de la pasta base. De ahí que las AUC se hayan disputado el control territorial con las FARC, para crear un epicentro junto con las regiones que ya manejan y que colindan con el corregimiento y el municipio en sí, las cuales son las subregiones del Bajo Cauca y del Urabá en Antioquia, el departamento de Córdoba y el sur de Bolívar.

Según un líder de la comunidad de El Cañón, hace más o menos cuarenta y cinco años la venta de café era más fácil en la cabecera del corregimiento de El Aro que en Santa Rita, dadas las vías de acceso hacia El Aro que se encontraban en buen estado, y por la presencia de quienes fueran los grandes terratenientes y compradores de este corregimiento, los señores Aurelio Areiza y Ricardo Builes, los cuales vendían la producción caficultora en Yarumal. Sin embargo, ellos fueron sacados de la zona por las autodefensas de la época, el primero fue asesinado y el otro desplazado⁶. En este momento es que la gente se dirige a Santa Rita con su producción, pero sin éxito. Allí no había quién comprara, hecho que afectó a quienes subsistían con la venta este producto. (Comunicación personal, Ituango, 24 de febrero de 2012).

Aparte de la exterminación de los compradores por parte de las autodefensas, algunos de los habitantes narran que esta zona también se vio afectada por la plaga de broca que azotó al país en la década de los noventa (Buriticá, 2010). Su llegada fue el fin de la bonanza para El Aro, sumado esto al hecho de que la violencia fue usada por parte de las autodefensas para aterrorizar al pueblo, haciendo que nadie volviera a comercializar allí y que los habitantes se fueran por miedo a la muerte. El comercio de productos cultivados en veredas circundantes era lo que dinamizaba la economía,

⁶ Para conocer más sobre estos hechos puede consultarse la Base de datos de víctimas silenciadas por el Estado en Colombia, <https://vidassilenciadas.org/victimas/16877/>

pues, según dice el líder citado, el clima de El Aro es muy irregular, ya que la cabecera tiene la influencia paramuna del final de la cordillera que viene del Nudo de Paramillo por el lado norte y, al mismo tiempo, la influencia del aire caliente del río Cauca por el lado sur. Lo que hoy vemos de este corregimiento no es ni la sombra de lo que fue, y es el fruto de las grandes agresiones que han sufrido sus pobladores.

Según lo plantea el líder, esta problemática fue la vía por la cual llegó la coca a toda la zona, y mal que bien fue la salvación al hambre que estaban sufriendo. Esto último puede indicar varias formas en las que el paisaje sufrió transformaciones como causa indirecta de la presencia de agentes armados: el mencionado cambio en los tipos de cultivos, la transformación en las vías de acceso, el cambio de centro de acopio y de actividades y la reacomodación de la población. En el texto “La cuestión agraria y la lucha armada en Colombia”, Igor Ampuero confirma que esta situación local, se replicó en diversos lugares del país:

una cantidad importante de la población se mantiene con la producción agrícola, para el mercado y/o la subsistencia. Mientras los desplazamientos y las reformas neoliberales han debilitado los productos tradicionales como la yuca, el café y el maíz (Clawson y Lee III, 1998; Richani, 2002), muchos campesinos y pequeños propietarios han tomado también el cultivo de coca para mantener cierto nivel de subsistencia. La producción agrícola ilícita se ha desarrollado en muchas regiones de Colombia durante las pasadas tres décadas, pero desde la década del noventa, la producción de la planta de coca de los pequeños propietarios ha proliferado. Algunos de estos cultivadores, que son muy pobres y campesinos que viven principalmente gracias a la agricultura de subsistencia, establecen un

pequeño terreno para cultivar coca junto con sus cultivos familiares (yuca, limón, maíz) y luego de un año podrán hacer más de lo que habrían podido lograr con un cultivo alternativo en el mercado legal. Una parte de estos agricultores vive en regiones donde operan las FARC-EP. (2008, p.384)

En la actualidad existen otro tipo de cultivos y prácticas productivas diferentes de la coca que la gente ha implementado, tales como el café, la caña de azúcar o los peces. Lo que se puede identificar respecto a la ubicación es que este tipo de economías se focalizan en las veredas más cercanas a la cabecera de Santa Rita, mientras que en las que están más alejadas, como El Cañón, siguen predominando los cocales.

Dos casos insignia respecto a la implementación de cultivos distintos a la coca son los de Elmer Padilla en la vereda La Chinita —cercana a la cabecera de del corregimiento— y Román Grajales en la vereda El Cañón —a cinco horas en mula de la cabecera—. El primero tiene una gran extensión de tierra dispuesta para el cultivo de caña, no solo para la alimentación de las mulas como normalmente lo hacen allí, sino también, gracias a su trapiche, para el procesamiento y la producción de panela. Y como anteriormente hubo bastante coca en la zona, se llevó a cabo la erradicación por aspersión de glifosato, hecho que afectó sus cultivos de caña y café —por lo que de hecho el dueño tiene demandado al Estado—. El segundo es el suegro de Elmer Padilla, que también ha vivido del cultivo de caña de azúcar. Cuenta que el trapiche lleva sesenta años de funcionamiento y es manejado con ACPM como combustible. Él posee la tierra y el trapiche hace veinte años y dice que hay molienda cada ocho días, sin embargo, antes se producían de seis a ocho cargas por molienda, pero ahora solo

son dos o tres cargas —de 1 a 2 arrobas⁷— (Comunicación personal, Ituango, 8 de febrero de 2012). Antes su producción, por ser tan amplia, podía ser vendida en Santa Rita y en El Aro, pero ahora solo es posible venderla entre los vecinos y en las veredas aledañas. Él también cuenta con algunos cultivos de coca, pero ahora son muy pocos, pues lo han afectado con la erradicación manual que viene dándose según él hace dos meses en las veredas El Perico, Los Pinos, El Cañón y La Polka⁸. Dice que se han visto sesenta o más arrancadores, acompañados del ejército. Menciona una situación delicada que se presentó en La Polka, una vereda muy cercana a su finca, en la que el ejército quemó una caleta⁹ y se llevó a la cárcel a cuatro trabajadores y al patrón, a quienes se los llevaron para Medellín y Yarumal (Comunicación personal, Ituango, 8 de febrero de 2012).

Otro aspecto que ha marcado significativos cambios en el paisaje a partir de la presencia de agentes armados es el manejo dado a las vías de acceso a través del tiempo. En cuanto a este hecho, el líder de la acción comunal de El Cañón nos da un importante contexto respecto de la vía más importante y más usada que comunica a Santa Rita con Ituango en el tramo que va desde el corregimiento de La Granja¹⁰ hasta Santa Rita.

⁷ Una arroba equivale a 12 kilos.

⁸ Este dato fue recolectado en febrero de 2012.

⁹ Los habitantes nombran así al sitio donde se procesa la hoja de coca para convertirla en pasta base. En otros sitios del país también se le llama “cocina”.

¹⁰ Corregimiento ubicado en la mitad del camino entre Ituango y Santa Rita.

Se explica que antes de llegar el ejército a la zona¹¹ la vía se mantenía en excelentes condiciones, pues todos los días había siete o diez personas trabajando en su mantenimiento. La forma de financiación para este procedimiento era que por cada libra comprada a la población —\$2.200.000— por parte de la guerrilla, se les dejaba de pagar \$10.000 a los vendedores, y este dinero se usaba para pagar a los jornaleros, que en promedio eran \$3.000.000 a la semana. De La Granja hacia abajo —hasta Ituango— se organizaban convites para la misma tarea.

Respecto a los caminos interveredales también se hacían convites con los hombres de la zona, los cuales dedicaban 365 jornales a esta tarea. Existían unos coordinadores de camino que eran los encargados de llevar la lista de asistencia al inicio y al final de la jornada, para que a quien no asistiera sin tener una excusa válida¹² se le cobrara multa de \$20.000, \$40.000 a la segunda falta, \$100.000 a la tercera, y luego evaluar si lo tenían que sacar de la vereda porque no servía. Esta última tarea también era asignada por parte de la guerrilla al igual que la de la carretera a Ituango. A este respecto, Ampuero menciona que “Las FARC-EP han construido caminos e infraestructura para facilitar la entrega de servicios al público y también diseñan una salida para los bienes y productos de la región para la venta y el intercambio (2008, p.387).”

La situación esbozada ha sido una simple consecuencia de los hechos mencionados a través de todo el recorrido entre escalas —nacional, regional, local—, que, además

¹¹ Antes de los periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y de la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

¹² Enfermedad, salida justificada de la vereda, entre otras.

de generar cambios en los procesos productivos y en las prácticas económicas, ha generado grandes transformaciones en el paisaje.

1.2.2.2. Condiciones socioeconómicas

Las condiciones socioeconómicas para esta población han sido variables, en primer lugar, por los cambios expresados anteriormente en los tipos de cultivos para la comercialización y, en segundo lugar, porque el cultivo del cual dependen para la subsistencia es de carácter ilícito, hecho que afecta en gran medida la capacidad adquisitiva de las familias, ya que los precios de la pasta base de coca no se acogen a la variabilidad de la inflación, a los cambios en los costos de vida anuales, al aumento o la disminución del salario mínimo, entre otros aspectos, y por ello es que su calidad de vida se ve directamente afectada. Aunque para algunos, este tipo de economía signifique riqueza o abundancia, la realidad es otra, pues si bien se mostró como algo rentable al comienzo, esto no fue muy duradero dados el aumento de oferta —más sembradores— y la misma o menor demanda; además la libra de pasta no ha subido su precio desde que se empezó a producir en esta región, es decir en la década de los noventa.

Con este pequeño abre bocas, y gracias a la información recolectada en campo, es posible corroborar que, aunque ilícito, el cultivo de coca es como cualquier otro, y genera una vida de inequidades entre los campesinos que la cultivan, tal y como se ve entre los cafeteros, cañeros, cacaoteros, entre muchos más.

Estas inequidades, para los santarriteños específicamente, no solo se desprenden de los precios de la pasta base de coca, sino también de lo que conlleva el cultivo de la planta, dándose así un círculo vicioso: por la ubicación ya mencionada de la zona, se

hace viable el cultivo de la planta en términos climáticos y de lejanía respecto a las cabeceras urbanas con fuerzas armadas institucionales; tal y como se describe en la escala regional y local, la ubicación geográfica que posee es de gran relevancia dentro de un corredor por el que transitan armas y drogas; estos hechos hacen que la población no tenga gran relevancia desde la mirada institucional para la adecuación de vías de acceso, el equipamiento y préstamo de servicios a la población en términos de capacitación, créditos o apoyo agropecuario. Mejorar las vías de acceso o los equipamientos de zonas como ésta, representaría facilitar y adecuar también las condiciones para los actores armados al margen de la ley.

Dadas las anteriores inequidades por parte las instituciones estatales competentes, la población se ve envuelta en un círculo de necesidades por saldar, las cuales no se satisfacen con el cultivo de productos tradicionales como el maíz, el café o el cacao, ya que los costos en el transporte, tanto para ingresar las cargas de pesticidas o abonos como para sacar los productos del cultivo, desbordan las ganancias que estos producirían. La respuesta para que los precios de tales insumos sean tan altos son las pésimas condiciones en las vías de acceso, que aumentan el valor de los medios de transporte; además de lo anterior, no existe un centro de acopio o un comprador fijo para ninguno de esos productos alternativos a la planta de coca. A este abandono por parte del Estado, se le suma la criminalización constante que los habitantes del lugar sufren, la cual resalta Ibán de Rementería, como una consecuencia local de situaciones políticas globales:

La criminalización de los campesinos que cultivan materias primas para la producción de drogas se ha visto acentuada con el recrudecimiento de la guerra

en Colombia impuesto por el gobierno del presidente Uribe Vélez. [...] asimismo, los pocos resultados militares en Colombia (Plan Colombia) pueden llevar a un mayor comprometimiento militar de los Estados Unidos en ese país y en la región andino-amazónica (Iniciativa Regional Andina). (2004, p.43)

En última instancia, para cerrar el círculo, el cultivo de la planta de coca se presenta como una opción distinta para saldar esas necesidades que cualquier ser humano posee, como lo es la alimentación, el vestido, la educación y la salud. Una opción que no necesita de transporte, pues una libra de pasta base se carga fácil, el procesamiento puede realizarse en el interior del mismo poblado y la comercialización también es en la misma zona a un comprador fijo, que puede tardar en llegar según las condiciones de orden público. El cultivo de la planta de coca es su más vital y efectiva forma de sobrevivencia, son pues cultivos pragmáticos y no misionales, esto quiere decir, que no cultivan coca porque les guste o porque es lo que tradicionalmente han cultivado, sino porque es lo que les permite sobrevivir, y a través de situaciones que no controlan como la aparición de la guerra a su territorio, fue que llegó esta planta a sus vidas.

1.2.2.3. Relaciones sociales y vida cotidiana

En cuanto a las relaciones sociales y la vida cotidiana, puede empezarse hablando del fenómeno del desplazamiento (Castillo, 2010, 4 de abril), que por muchos años ha marcado esta zona dados los diversos enfrentamientos entre los grupos armados del momento, sea guerrilla-paramilitares o guerrilla-fuerzas armadas legales, o la presión por parte de estos sobre la vida familiar de los habitantes, hecho que altera la

estructura familiar, la fuerza de trabajo y la estabilidad emocional, entre otros elementos.

Otra situación que se incorpora a esta vida en medio de la guerra es la de los hostigamientos realizados por parte de la guerrilla a la policía o al ejército, que están ubicados en los centros poblados, generalmente escudándose en la población civil, que en últimas es la más afectada; no es la población la que se mete en el centro del conflicto, son los artífices del conflicto los que la toman como centro.

Ya que las Fuerzas Militares solo tienen presencia en las cabeceras, conservan una gran prevención con los campesinos que vienen de las veredas, los señalan de guerrilleros y los agreden por supuestos vínculos con los grupos insurgentes, en tanto que estos tienen presencia en la zona rural. De esta manera, han capturado (Ascomi, 2012, 28 de agosto), e incluso matado (Agencia Prensa Rural, 2011, 30 de abril), innumerables pobladores, sin tener pruebas contundentes de los vínculos.

Un aspecto que oscurece aún más el panorama es el proyecto hidroeléctrico que se está ejecutando actualmente: Hidroituango. Según algunos habitantes (Comunicación personal, Ituango, 22 de enero de 2012), las numerosas torres de energía que han sido tumbadas en los últimos años han caído como forma de presión por parte de la guerrilla a dicho macroproyecto. Este hecho recurrente afecta en gran medida a la población civil, que debe permanecer por largos periodos sin el servicio de energía eléctrica, además de la zozobra y la sensación de peligro que estos hechos generan.

Según Rossana Reguillo, “lo cotidiano se constituye por aquellas prácticas, lógicas, espacios y temporalidades que garantizan la reproducción social por la vía de la reiteración, es el espacio de lo que una sociedad particular, un grupo, una cultura,

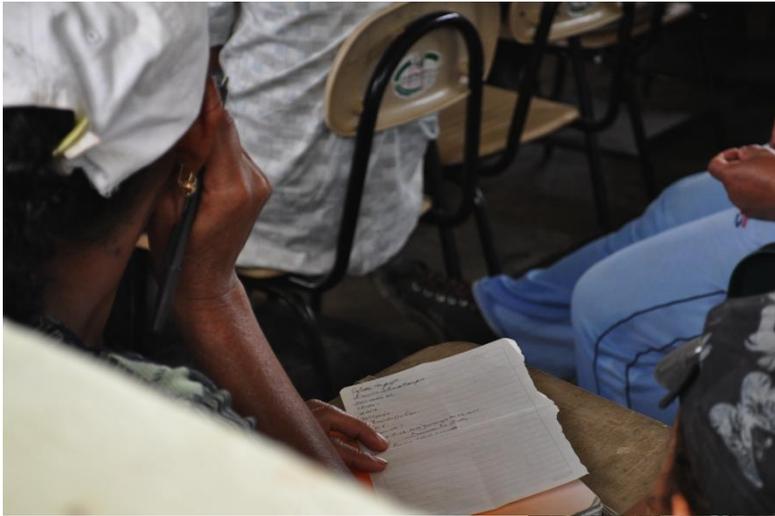
considera como lo 'normal' y lo 'natural'" (Reguillo, citada en Madariaga, 2006, p.2). Esta vida cotidiana es una construcción a partir del diálogo inquebrantable con los hechos extraordinarios, los cuales se van incorporando a dicha vida cotidiana a través de la normalización, lo cual permite "proteger contra el acontecimiento" que trastoca el orden normal de la cotidianidad (Reguillo, citada en Madariaga, 2006, p.3). En congruencia con esto, pensar la violencia como un elemento de la vida cotidiana implica dejar de concebirla como algo extraordinario, para pasa a ser concebida como parte del ámbito de lo esperable (Madariaga, 2006 p.3).

En este sentido, para los habitantes de la localidad ha sido necesario entrar en un proceso de normalización de los acontecimientos provocados por la presencia de múltiples agentes que ostentan el poder, ya que de otra forma sería insoportable la vida diaria. César Augusto Tapias se refiere al concepto de naturalización de la violencia y plantea que

Pensar la violencia así, como un elemento de la vida cotidiana, implica dejar de verla como de naturaleza extraordinaria, y cuando esa violencia se convierte en una forma de vida normal, se tiende a rutinizar el terror, a banalizar la violencia misma y hablar del "no futuro" desde las descripciones comunes que hacen científicos sociales como Salazar (1990), Taussig (1992), Scheper-Hughes (1992) y Bourgois (1995), considerando cierta impotencia de los sujetos para intervenir sus ambientes y simplificando, de paso, su agencia. (2010, p.105).

Desde la misma población es clara esta actitud de normalización o naturalización de la violencia; tal y como se menciona en el anteproyecto del Plan de Desarrollo 2012-

2015 de Ituango: “se puede observar en la comunidad del municipio la naturalización del conflicto y de sus consecuencias. Es decir, como todo pueblo, Ituango es resiliente en un nivel significativo y su capacidad para sobreponerse a las situaciones diversas es incomparable” (Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 2012, p.10). Sin embargo, por más que se haya incorporado la violencia a la vida cotidiana, estos acontecimientos de una u otra forma siguen perturbando las actividades normales y las relaciones sociales.



La producción de procesos
identitarios como
herramienta de resistencia



Habitantes del corregimiento de
Santa Rita, y del resguardo indígena
Jaidukama. Archivo personal

2. La producción de procesos identitarios como herramienta de resistencia

Para el tema de procesos identitarios, se revisó el autor Patricio Guerrero, quien en su texto “La cultura. Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia”, realiza un recorrido por distintos temas y conceptos de importancia para los estudios antropológicos. En el capítulo diez, se inclina sobre el tema de cultura e identidad, y habla de distintos enfoques para entender o aproximarse a los procesos identitarios. Entre dichos enfoques están el esencialista, el culturalista, el primordialista, el objetivista, el subjetivista y por último el enfoque constructivista relacional, siendo este último el más adecuado para abordar el tema de procesos identitarios en este trabajo de grado. Según Guerrero, este enfoque percibe las identidades como “construcciones sociales y construcciones dialécticas, pues las identidades cambian, se transforman constantemente, están cargadas de historicidad” (2002, p.101), y como construcciones sociales que son, constituyen un sistema de relaciones y representaciones. En cuanto a esto, el autor también establece que

Las representaciones sociales son un complejo sistema de percepciones, imaginarios, nociones, acciones, significados, significaciones y sentidos que funcionan como entidades operativas que mueven a la praxis humana y determinan el sistema de preferencias, de clasificaciones, de relaciones, opciones, posicionamientos, prácticas, pertenencias y diferencias; las adscripciones, exclusiones y fronteras, en definitiva: modelan la percepción que un individuo o grupo tiene de la realidad, de sí mismo y de los otros (2002, p.101)

Las acciones comunitarias o colectivas se encuentran relacionadas con el eje transversal de procesos identitarios y con el concepto de lugarización, pues como diría Jaime Preciado Coronado:

las fronteras territoriales se amplían al entorno transterritorial de lo étnico, lingüístico y cultural, y [...] la lógica de interpretar al territorio como el espacio dado, productor de identidades, puede ser invertido e interpretado como una construcción que resulta de las dinámicas sociales que demandan mediante sus prácticas políticas espacialidades múltiples, ya sean territoriales o no. (2010, p.73)

Dichas acciones comunitarias, son básicamente una consecuencia o reacción hacia hechos, invisibilizaciones, atropellos, inconformidades y demás aspectos dados en una comunidad específica, por lo general, implican la asociación, la organización y la generación de acuerdos. James Scott a partir de estos hechos menciona que “sólo cuando fracasan las medidas menos drásticas, cuando la subsistencia se encuentra amenazada [...], el campesinado se atreve a seguir el camino del desafío abierto y colectivo (2000, p.113). Desde una perspectiva antropológica, las acciones comunitarias hacen parte de aquella construcción social, que en últimas forma la cultura, y tenerlas en cuenta es fundamental para entender cómo a través de ellas se generan vínculos inherentemente culturales; como lo diría Patricio Guerrero:

Si vemos la cultura como una construcción social presente en la diversidad de la sociedad humana, sería equívoco entenderla al margen de la misma sociedad y de los sujetos sociales que la construyen, puesto que la cultura es posible, porque existen seres concretos que la construyen desde su propia cotidianidad

como respuesta a la dialéctica transformadora de la realidad y de la vida. De ahí la importancia de estudiar los procesos sociales e históricos que nos acerquen a los actores constructores de cultura y a los procesos de construcción, deconstrucción y revitalización de sus creaciones culturales. (2002, p.51)

2.1. Organización y resistencia para enfrentar la violencia, el abandono institucional, el despojo y el olvido

Las asociaciones, organizaciones y procesos sociales desde los que se ejercen las acciones comunitarias pueden resultar siendo coyunturales y desvanecerse en el tiempo, dependiendo de las razones que las produzcan y la complejidad política que impliquen, y dependiendo también de los resultados que se den luego de dichas acciones. Por otro lado, también pueden constituirse como un elemento de reconocimiento con y hacia el otro, que abra oportunidades de discusión y construcción política, de encuentro, de búsqueda de estrategias de resistencia, de movilización, de consecución de reivindicaciones, para finalmente dar pie al fortalecimiento de un proceso identitario existente o a la conformación de uno nuevo. Es importante tener en cuenta que, como Eduardo Restrepo plantea: “Las identidades no están en el más acá y en el antes de la acción colectiva, sino que devienen en existencia y se transforman en estas acciones y las experiencias derivadas” (2007, p.28). Los procesos organizativos vinculados a procesos identitarios estarán relacionados inherentemente al ejercicio del poder, y puede situarse entonces como un fenómeno político; frente a esto Guerrero expresa que

Se evidencia la cuestión del poder cuando la búsqueda por ser nosotros mismos choca con los obstáculos de una estructura dominante que pretende una

sociedad homogénea, que no respeta la diversidad, la pluralidad ni las diferencias, que no reconoce la existencia del "otro" si no en su condición de dominación e inferioridad y busca, por tanto, su asimilación o liquidación. (2002, p.119)

La lugarización también desempeña un papel importante dentro de los procesos sociales; Francisco González plantea que tiene varias consecuencias en aspectos como el político-administrativo y el económico, y que dicho ejercicio de lugarización se relaciona a su vez con los procesos organizativos, asociativos y de movilización, respecto a lo cual menciona que “la gente se convence [de] que su calidad de vida y su prosperidad dependen fundamentalmente de su propio esfuerzo y entonces se organiza para hacer las cosas que considera necesario. No espera que las autoridades resuelvan los problemas. La gente toma conciencia, se organiza y actúa” (2009, p.60).

Tal apreciación es fundamental al momento de entender cómo inciden las acciones comunitarias en la construcción de redes sociales y comunales que devienen en procesos identitarios y cómo hasta cierto punto se logra consolidar lo que puede nombrarse como normatividad propia o alternativa, que si bien no está incluida dentro de las legislaciones estatales, provee una guía de actuación para los pobladores y los autorregula en su lugar de habitación. Cómo diría Guerrero:

Es quizá allí, en su marcada dependencia de los otros en donde se encuentra la mayor fragilidad, pero también la mayor grandeza de lo humano, el saber que solo podemos llegar a ser lo que somos gracias a los demás, a los otros y con los otros; y a la cultura que otros han construido. (2002, p.53)

En el caso de Santa Rita, específicamente en la vereda El Cañón, la apertura a estos procesos identitarios se ha dado en gran medida por la presencia de plantaciones de coca y a causa del conflicto armado causado por los agentes armados legales e ilegales, los cuales han tenido presencia a razón de la posición geoestratégica que convierte la zona en blanco deseable de poder¹³. Los agentes armados que hicieron presencia en la zona al momento de realizar este trabajo fueron el Frente 18 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Batallón de Combate Terrestre 112 del Ejército Nacional de Colombia (Caracol Radio, 2011, 7 de noviembre) y la Policía Nacional. A este respecto, Eduardo Restrepo apunta una importante conclusión, en la cual expresa que:

[...] las disputas directas u oblicuas a las relaciones de poder y explotación suelen involucrar el surgimiento y consolidación de las identidades. Las acciones colectivas que problematizan las relaciones de poder institucionalizadas (de explotación, dominación y sujeción) a menudo son aglutinadas por identidades que perfilan su sujeto político. Estas identidades, sin embargo, no son preexistentes a las acciones colectivas desplegadas en su nombre, sino que son en gran parte el permanente y cambiante resultado de las acciones mismas (2007, p.28).

Y es precisamente a raíz de aquellas disputas de las relaciones de poder y explotación presentes en la zona que se han dado acciones comunitarias y movilizaciones, que finalmente devienen en los procesos identitarios que han permitido

¹³ Tal y como se describe en el capítulo uno, escala regional y local, en prácticas productivas y paisaje.

hasta el momento que la población resista a la violencia, al abandono institucional, al despojo y al olvido.

A continuación se dará cuenta de algunas formas de organización evidenciadas entre la población, las cuales han propiciado espacios de encuentro y asociación que en últimas aportan a la producción de los mencionados procesos identitarios como herramienta de resistencia.

2.1.1. Organización sociopolítica

La vereda El Cañón está compuesta por varias viviendas que antes fueron de las veredas El Perico y La Polka, la primera se encuentra al sur y la segunda al norte de lo que hoy es El Cañón. Al momento de realizar el trabajo de campo, las familias que componían la vereda eran doce.

La razón principal por la cual estas familias decidieran independizarse es que las escuelas de las veredas a las que pertenecían quedan demasiado distantes de las viviendas en cuestión, hecho que estaba generando una gran deserción escolar, y no hay que olvidar que la asistencia a las escuelas rurales ya de por sí es reducida. La actual escuela de la vereda El Cañón fue construida entre toda la comunidad por convites, y el lote lo donó el señor Albeiro Alzate.

Al momento de la publicación del atlas veredal de Antioquia del año 2006, esta vereda aún no existía, de modo que no aparece allí. Es importante anotar que las veredas El Perico y La Polka aparecen como si fueran parte del corregimiento de El Aro y no de Santa Rita, como normalmente se cree. El líder de la comunidad explica que esto es a razón de que el mapa de la zona como tal se construyó con fuentes de la diócesis, y según esta fuente, en el pasado dichas veredas aportaban a El Aro de

forma económica y religiosa, es decir, con feligreses que apoyaran la parroquia, situación que cambió por los aspectos ya desglosados en el capítulo anterior, por vía de la violencia y el decaimiento de El Aro como epicentro económico (Comunicación personal, Ituango, 7 de febrero de 2012). Por lo anterior, la población de las veredas nombradas, incluyendo El Cañón, hoy se consideran parte de Santa Rita, ya que es alrededor de esta cabecera municipal que giran sus actividades económicas y sus relaciones sociales y políticas¹⁴.

La conformación de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda se realizó inmediatamente se empiezan a organizar como vereda legalmente, ya que, según el líder, esta es la única forma en que pueden ser visibles ante el municipio para reclamar sus derechos; esta herramienta organizativa también amplía los medios comunicativos entre ellos y propicia espacios de consolidación identitaria. También menciona que la guerrilla generó una especie de conciencia en la población para que este tipo de organización social se consolide y se mantenga, en aras de la defensa de los derechos como ciudadanos y campesinos. Para el momento en que se realizó el trabajo de campo los integrantes eran, con sus cargos:

Alberto Moná – presidente

Albeiro Alzate – vicepresidente

Yury Navarro – secretaria

Julia Otálvaro – tesorera

Belisario Restrepo – fiscal

¹⁴ Estos hechos pueden servir como una forma de restitución de la cartografía existente de la zona.

Respecto al proceso de elección, es necesario que las personas se inscriban quince días antes de dicha elección para que se les permita votar. Luego se publica el listado de los candidatos, el cual consta de dos listas distintas compuestas por grupos diferentes de candidatos a los cargos mencionados, y aparte de eso debe haber otra lista con candidatos para el cargo de fiscal. Otros grupos que componen la JAC son los comités de trabajo, de educación y de salud (deporte).

2.1.2. Organización económica

En cuanto a los antecedentes económicos de la vereda, un aspecto relevante ha sido la asociación por parte de los integrantes alrededor de la producción de la planta de coca, hecho de vital importancia, dado que para dicha producción es necesario contar con diversos materiales, mano de obra calificada y no calificada e infraestructura. Dichos elementos no siempre están disponibles o son de propiedad de todo aquel que cuenta con los cultivos, por lo que se hace necesario generar lazos con aquellos que sí cuentan con todo el montaje.

Tales lazos se desprenden de los vecinazgos, compadrazgos y vínculos parentales que por años se han forjado en la zona, pero que a través de esta práctica productiva, como común denominador, se han fortalecido.

Sin embargo, la plantación de coca no es la única práctica productiva que la población posee, y que los vincula en términos económicos. También existen familias que poseen cultivos de caña, frijol, café y ganadería de doble propósito¹⁵.

Para el caso del cultivo de caña, es solo una de las familias de la vereda la que los posee en medianas proporciones y cuenta con un trapiche para la producción de

¹⁵ La leche es usada para la producción de queso de venta local y para el consumo diario.

panela, la del señor Ramón Grajales. Dicho producto es comercializado entre las veredas aledañas y los vecinos, ya que no es mucha la cantidad que se obtiene, a diferencia de hace unos veinte años, cuando la producción obtenida permitía que se comercializara en los corregimientos de Santa Rita y de El Aro.

El frijol es producido para el consumo de las familias, y solo en un caso, el de don Agustín y doña Margarita, se presenta que la poca producción en algunas ocasiones es posible venderla pero para ser usada como semilla.

Respecto al café, este es un cultivo que se está volviendo a sembrar en la zona —de manera incipiente— a raíz de los procesos de erradicación de coca, las familias han empezado su siembra de manera autónoma ya que han confiado en el hecho de que serán apoyadas en cuanto a abonos, a pesticidas (Comunicación personal, Ituango, 8 de febrero de 2012), y a la implementación real de un centro de acopio por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, que garantice la venta de su producción, y a la entrega del carné que los certifica como caficultores, el cual les traería múltiples beneficios, como el acceso a las ayudas que se dan desde el Gobierno en términos de créditos y de subsidios en abonos y pesticidas; además, todo lo que deban comprar sería más fácil de ingresar a la población, ya que no tendrían problemas con la fuerza pública, pues este tipo de abonos también son usados para la planta de coca y en muchas ocasiones son decomisados, o la cantidad que se permite ingresar es limitada.

En cuanto a la ganadería de doble propósito, son pocas las familias que cuentan con algo más de quince o veinte animales —entre dos y tres familias—, el resto posee menos de diez. La leche que se ordeña no es posible venderla por las nulas vías de acceso, por lo que es empleada para la fabricación artesanal de queso el cual se

conserva con sal, pues no se cuenta con sistemas de refrigeración dado que, si bien la energía eléctrica llegó a la región hace unos años¹⁶, la capacidad adquisitiva de la zona no ha permitido la compra de electrodomésticos a todos los habitantes.

La producción de carne es incipiente, en primer lugar, porque es poco el ganado con que se cuenta y, en segundo lugar, porque la venta de esta no es fácil, ya que sacarla hasta otros centros poblados con un mercado más propicio no es rentable. Según don Belisario Restrepo, quien es uno de los propietarios de ganado en la vereda, ahora es más fácil vender la carne en Santa Rita, pero que, como todo el mundo hace lo mismo “toca esperar el turno”; en ocasiones son hasta tres meses de espera para que los distribuidores de carne de la cabecera municipal reciban una res o un cerdo por propietario¹⁷.

Acerca del papel que desempeña en esta zona de Ituango la Asociación de Ganaderos de Ituango (Asogadi), los habitantes plantean que en Santa Rita dicha asociación no tiene presencia alguna. Desde conversaciones sostenidas con algunos habitantes, se menciona que esta organización solo sirve para algunos pocos, aquellos ubicados en la centralidad del municipio y con recursos, pero que el corregimiento está totalmente abandonado.

Existen otros productos de pequeña producción, los cuales son usados por las familias como pancoger o como insumos de intercambio. Está el plátano, el maíz, el cacao, los árboles frutales (naranja, limón, guanábana, mandarina) y algunos vegetales (cidra, cebolla, tomate, cilantro).

¹⁶ Dos años antes al momento de realizar el trabajo de campo (2011-2012)

¹⁷ Información recolectada en campo, en febrero de 2012

2.2.Coca: erradicación y movilización

Es necesario ampliar el papel que desempeña el cultivo de la planta de coca, y cuáles han sido sus repercusiones en términos políticos y económicos, ya que a nivel local este cultivo sirve como medio de subsistencia, se establece como un elemento dinamizador de la economía a nivel municipal y como configurador de un paisaje biofísico y social y, además, propicia procesos de movilización social.

Sirve como medio de subsistencia, ya que aporta en la satisfacción de las necesidades básicas de los pobladores, dado el abandono institucional respecto a las mejoras en las vías de acceso que permitirían la activación del comercio de otro tipo de productos; a la falta de subsidios de carácter agropecuario; a la ausencia de centros de acopio que garanticen el comercio justo de sus producciones; a la falta de capacitación y acompañamiento de instituciones idóneas; abandono en término de salud, vivienda educación básica y media dignas, entre otros.

Se establece como un elemento dinamizador de la economía a nivel municipal, ya que a través de la venta de la pasta base de coca los habitantes pueden usar las ganancias para satisfacer sus necesidades básicas comprando en los establecimientos ubicados en las cabeceras municipales principales, lo cual activa el comercio de manera radical. Es evidente cuando las producciones de pasta no han sido vendidas, ya que en dichas cabeceras todo se visualiza más quieto de lo normal, las tiendas, los almacenes, los bares y las cantinas cierran más temprano o simplemente no abren todos los días, en tanto que no hay una circulación de efectivo para adquirir los productos o servicios ofrecidos. Frente a este fenómeno César Augusto Tapias Hernández plantea que

Se trata pues de una condiciones sociales, impuestas por unas fuerzas sociales que atentan contra la experiencia humana [...], tanto en lo micro como en lo macro, y a las que sin embargo estos actores sobreviven (o responden) mediante unas prácticas que, aunque ilegales, son vía para la participación en la legalidad, o para la consecución de los recursos que les hacen falta. (2010, p.96)

Se establece como configurador de un paisaje biofísico y social, ya que a partir de su llegada a la población hace unos veinte años, el entorno territorial ha sufrido importantes transformaciones; el área de sembrado que otrora funcionó con cultivos de café, maíz o caña hoy se usa para las plantaciones de miles de palos de coca, hecho que tiene repercusiones sociopolíticas importantes a nivel local, regional, nacional e internacional, por la forma en que es asumida desde estos contextos la acción de subsistir a partir de cultivos ilícitos y la relación implícita de estos cultivos con agentes armados como la guerrilla. En este sentido, quienes más sufren las consecuencias son los habitantes, pues son estigmatizados incluso por sus propios coterráneos de veredas vecinas, y por las fuerzas armadas institucionales y, a mayor escala, por la nación, que los relaciona directamente con el ejercicio del narcotráfico, desconociendo el contexto y las posibilidades reales de subsistencia que se presentan en esta zona.

Propicia procesos de movilización social, dadas las múltiples opresiones por parte de los agentes armados presentes, y dadas las estigmatizaciones que en general sufren los pobladores a raíz de esta práctica productiva. A este respecto es necesario reiterar las movilizaciones que se han generado por parte de los campesinos a razón de la erradicación por aspersion de glifosato, y los intentos que se han hecho por llegar a un acuerdo justo respecto a la posibilidad de implementar economías alternativas, las

cuales tengan un acompañamiento adecuado por parte de las instituciones y los programas estatales y gubernamentales que realmente propicien la satisfacción de las necesidades básicas y, por ende, una vida digna para los pobladores¹⁸.

En este sentido, aporta de manera significativa la experiencia relatada por el entonces presidente de la JAC de la vereda El Cañón, el señor Alberto Moná, quien fue partícipe de dichas movilizaciones y estuvo enterado de las exigencias que como colectividad se tenían y de los acuerdos a los cuales se llegaron en ellas.

A las movilizaciones realizadas en 2011 hacia Tarazá acudieron un hombre y los jóvenes de cada familia. La idea principal con estas movilizaciones era exigir que se dejara de efectuar la erradicación por aspersión de glifosato en la zona, ya que este evento tenía altamente perjudicados los cultivos diferentes a la coca de una gran cantidad de habitantes, tanto en la subregión del Bajo Cauca como en la del Norte, específicamente en el municipio de Ituango, corregimiento de Santa Rita. También se mencionaron afecciones en la salud de mujeres embarazadas y de niños por este hecho.

En la movilización del mes de febrero de 2011 las exigencias eran las siguientes: que la erradicación fuera de carácter manual; que se apoyara a los habitantes con cultivos alternativos como café, cacao, frijol, maíz, entre otros, esto con acompañamiento técnico y de transporte y, como punto de gran importancia, que se dispusieran centros de acopio para dichos productos, los cuales garantizaran su comercialización efectiva; y, por último, que se realizara un proceso de titulación de

¹⁸ Estas movilizaciones se mencionan en el capítulo uno, en la escala regional y local (sección 1.2.2).

tierras. Por parte del Bajo Cauca se exigía también la electrificación de zonas que aún no contaban con este servicio.

En esta negociación hizo presencia institucional el entonces gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, los entonces alcaldes de Ituango y de Tarazá, Carlos Mario Gallo y Yuan Andrés Restrepo, respectivamente. Por parte de los campesinos hicieron presencia la Asociación Campesina del Bajo Cauca (Asobac) y algunos de los presidentes de las JAC de las veredas de Ituango (del corregimiento de Santa Rita de Sinitavé, específicamente). En cuanto a esto, se puede inferir que quienes estuvieron directamente implicados en la negociación fueron muy pocos, y al parecer no fueron lo suficientemente claros para dar a conocer los logros y acuerdos concertados entre el resto de la población, ya que varios habitantes de la vereda que también participaron de la movilización, al preguntarles, no supieron dar razón de cuál fue la conclusión de esta, y uno de ellos expresaba que para él todo este evento fue una pérdida de tiempo, pues nunca entendió qué se había logrado o qué beneficios traería todo esto para ellos como campesinos. A este respecto James Scott (2000) cita a Gramsci (1971), quien menciona que “el hombre-masa actuante tiene una actividad práctica, pero no tiene una conciencia teórica de esa actividad práctica”¹⁹ (Scott, 2000, p.117).

Al solicitar información sobre los resultados de la movilización al entonces presidente de la JAC, explica que el acuerdo al cual se llegó fue básicamente la intención de aplicar la Política Nacional de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo para la Consolidación Territorial, aprobada por el Consejo Nacional de Política

¹⁹ Gramsci, Antonio, Selections from the Prison Notebooks, Wishart, Londres, 1971. (comp. y trad. de Quinten Hoare y Geoffrey Nowell Smith). p. 333.

Económica y Social (Documento Conpes 3669) en 2010, e implementar el Programa de Familias Guardabosques, el cual es una iniciativa gubernamental, que lidera la Consejería para la Acción Social, en el marco del Programa de Desarrollo Alternativo.

Según la explicación del señor Alberto, el proceso está compuesto por tres etapas divididas en tres años. En la primera, se firma un acuerdo con el Gobierno en el cual se incluye una zona específica, compuesta por una o varias veredas. Se realiza un primer proceso de erradicación, sea manual o por aspersión, y si quedan algunos cultivos sin erradicar, el compromiso de la gente es no seguirlos administrando²⁰. En este primer año deberían empezar a entrar ayudas por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, del Programa de Familias Guardabosques y de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao).

Se supone que en la segunda etapa se terminaría de erradicar, y aunque los cultivos alternativos no hayan empezado a producir, deberían seguir llegando ayudas por parte del Estado, que consisten en créditos, abonos, pesticidas, semillas y material en especie que contribuya a las nuevas producciones. En la tercera y última etapa se supone que todos los cultivos ilícitos ya estarían erradicados, por lo cual deberían llegar las ayudas por parte de la Organización de las Naciones Unidas, las cuales sí serían subsidios de carácter monetario.

Algunas restricciones en este acuerdo son, por ejemplo, que si alguna persona o vereda de las incluidas incumple con la no producción o administración de los cultivos ilícitos, se verían afectados el resto de los implicados en el proceso, por lo que todos perderían las ayudas y saldrían del acuerdo. La única solución sería que los que no

²⁰ Es decir, no seguir produciendo la pasta base de coca.

hayan incumplido con el acuerdo denuncien a los que sí lo hicieron. Vistas las restricciones y el acuerdo en general, no suena tan mal; sin embargo, las circunstancias son otras, y son tantas las variables que es realmente imposible para los campesinos cumplir con todas las exigencias dispuestas.

Para empezar, el contexto normativo por parte de agentes armados ilegales en Santa Rita es claramente influyente en cualquier acción que la población pueda ejercer, hecho que limita cuestiones como las denuncias en contra de los pobladores que incumplan las condiciones, ya que aquel que incumple sería metido a la cárcel por procesamiento y conservación de narcóticos, y nadie va a querer ser el culpable de encerrar a un vecino suyo; además, si la guerrilla se entera de esta acción, puede tomar represalias funestas en contra del denunciante por “sapo”, represalias como el destierro o la muerte.

Por otro lado, los únicos que en términos prácticos están obligados a cumplir con su parte del acuerdo, son los campesinos pues las represalias por incumplimiento son claras y contundentes, mientras que el Gobierno Nacional, que es el responsable de efectuar las ayudas en las primeras dos etapas, si no cumple con sus responsabilidades no está expuesto a ningún tipo de penalidad. Además de que no aporta con subsidios sino con créditos —si es que el campesino es elegible en términos financieros—, tampoco entrega de forma completa o cumplida los materiales que se establecen para posibilitar los cultivos alternativos a la planta de coca.

Además de lo anterior, aunque dentro de la Política de Erradicación se establezcan garantías respecto a la creación de acopios para los productos, al transporte y a la comercialización, esto no se ve aplicado en la realidad; hecho que trasciende

gravemente sobre la calidad de vida de los santarriteños, pues no les es posible contar con garantías para la comercialización, y al vivir en un lugar tan alejado, las condiciones en las rutas de acceso son deficientes, lo que deviene en la elevación de los costos en sus procesos de producción a través del pago excesivo para dicho transporte. A continuación se incluyen los compromisos que se plantean en la Política de Erradicación en cuanto al apoyo para los mencionados aspectos:

El desarrollo alternativo se implementa con el acceso a bienes y servicios identificados durante la formulación que contribuyen al incremento de los indicadores de calidad de vida y la generación de valor en la cadena productiva ya que la simple concentración en lo productivo no es garantía de sostenibilidad, se necesitan procesos integrales para que la comunidad no reincida en las actividades ilícitas, es decir, se requiere de la implementación de iniciativas que contemplen aspectos económicos, sociales, ambientales e institucionales, donde se consideren las actividades de seguridad alimentaria y productivas a corto, mediano y largo plazo; el acceso al crédito; el mejoramiento de la infraestructura vial; el fortalecimiento a las organizaciones; la titularización de los predios, las buenas prácticas ambientales; así como el mejoramiento de la presencia de las instituciones y la relación de estas con la comunidad. (Conpes, 2010, p.55)

La segunda movilización realizada en el mes de octubre de 2011 se presenta porque hubo incumplimiento por parte del Gobierno Nacional respecto a los compromisos definidos en el mes de febrero, los cuales fueron, en primera medida, el no continuar la erradicación a través de la aspersion de glifosato sino a través del método manual y, segundo, la aplicación de manera adecuada y oportuna de la asistencia definida en la

Política de Erradicación. Estos hechos confirman el incumplimiento del Gobierno ante cualquier tipo de acuerdo o convenio que establece y la desconfianza que se tiene por parte de la población para sumarse a este tipo de procesos.

En cuanto a la erradicación y la implementación de cultivos alternativos —café y cacao— no se ha realizado un proceso serio que realmente beneficie a la población y le garantice la satisfacción de sus necesidades básicas. Existen casos en otros sitios del país como el de los campesinos de Santander, a los que se les ha aplicado la Política de Erradicación y han implementado cultivos de cacao, los cuales han sufrido a raíz de la caída del precio del grano (Semana, 2012, 21 de abril). Esto y la crisis cafetera en todo el país (El Espectador, 2013, 2 de marzo), demuestran que no existen garantías por parte del Gobierno Nacional para que durante el proceso de erradicación y sustitución se dé una asistencia técnica real a los campesinos y para que la comercialización de estos productos sea efectiva y justa. Tal y como se lee en la siguiente cita, dentro de la Política de Erradicación esto se contempla, sin embargo, no se ejecuta en la realidad, por lo que se puede decir que la Política de Erradicación y sus contenidos son letra muerta:

Las anteriores oportunidades, requieren de un acompañamiento integral y sostenido y de asistencia técnica que permitan generar alternativas productivas competitivas sin deteriorar los recursos naturales y el ambiente, que fortalezcan las organizaciones productivas y alianzas comerciales. Con el fin de aprovechar las oportunidades del mercado se promoverá la generación de valor agregado para productos determinados, así como el desarrollo de iniciativas en el marco

de la mitigación del cambio climático y el manejo forestal sostenible. (Conpes, 2010, p.55)

Es necesario evidenciar que este tipo de acuerdos son inequitativos y basados en falacias, acuerdos donde los únicos “beneficiados” desde la opinión pública son el Gobierno nacional y el departamental, puesto que se muestran como instituciones abiertas a la erradicación manual y concertada y expresan que se dará respaldo a la población implicada en el proceso, sin embargo, la gente no recibe un beneficio real y efectivo, pero igual tiene que renunciar a un cultivo que, aunque ilícito, es el único que le permite tener ingresos para una vida medianamente digna, y no para hacerse ricos como supone la opinión pública. Los Casos de Santander y la mencionada crisis cafetera, son ejemplos de que la Política de Erradicación no cuenta con el engranaje y las herramientas para su debido cumplimiento, lo cual es un panorama desalentador para quienes apenas comienzan el proceso de inclusión dentro de dicha Política.

2.3. Una mirada a las formas de resistencia locales y al territorio como medio de producción de procesos identitarios y normatividades alternativas

A través del contexto descrito es posible entender de qué manera influye la interacción de la economía cocalera y las normatividades dispuestas por los agentes de poder sobre la producción de procesos identitarios y la producción de normatividades alternativas en el corregimiento de Santa Rita, municipio de Ituango, Antioquia, y en última instancia cómo se forjan mecanismos de resistencia basados en la asociación, que dan como resultado la autorregulación y la generación de formas autónomas de organización política, o como se ha nombrado en este trabajo, la generación de

normatividades alternativas. Tal y como lo anota Vladimir Montoya, relacionando lo anterior con el territorio:

[...] cada vez con más fuerza los grupos sociales en distintos lugares están reclamando la validez de sus propias interpretaciones, de sus saberes, de sus prácticas económicas y ecológicas, de sus formas de ser en el mundo conformando una serie de ejercicios de resistencia cultural que muestran la importancia del territorio como sostén de la vida humana (2009, p.81).

Pues es el territorio con sus características específicas el que en últimas funciona como escenario de construcción colectiva, de encuentros, de procesos decolonizadores y de producción de procesos identitarios que dan pie al surgimiento de normatividades alternativas que transgreden las porosidades de aquellas normatividades codificadas o implantadas a partir de los mecanismos o agentes de poder, dando como resultado procesos de territorialidad:

[...]la territorialidad entendida de esta manera [le] implica al modelo de desarrollo contemplar la flexibilidad suficiente para adecuarse a unos territorios que no son fijos y acabados sino que son cambiantes y en continua transformación de acuerdo a los vaivenes de la realidad social. Por lo tanto, el sentido de pertenencia, el arraigo, la conformación de las identidades culturales, las adscripciones a escalas territoriales como la región y el reconocimiento mutuo entre los individuos, son expresiones de territorialidades (Montoya, 2009, p.84).

En el caso de la comunidad santarriteña, el hecho de estar ubicada en un entorno territorial que está bajo la mirada de varios grupos de poder, le implica sobrellevar las múltiples normatividades que los poderosos imponen. Daniel Pécaut, se refiere al

concepto de “desterritorialización” del conflicto, desde el cual se establece una lucha por el poder político y militar, el cual no implica necesariamente la apropiación del territorio sino del aseguramiento de posiciones, implica un control estratégico basado en la fuerza y la coacción (2004, p.24).

Es así como sobre la marcha la población debe aprender a responder a cada uno de los actores de armados de poder, y al mismo tiempo generar mecanismos de defensa para conservar la vida, para lograr formas de subsistencia y para fortalecer la convivencia y la asociación. Como ejemplos se encuentran el fortalecimiento de los vecinazgos y compadrazgos a través del apoyo mutuo en la producción de cultivos y en los procesos de intercambio de alimentos, entre otros; las diferentes formas de organización para enfrentar fenómenos como la erradicación de los cultivos ilícitos y para enfrentar la falta de presencia estatal en términos de educación y salud y otras necesidades básicas. Frente a esto último Pécaut menciona que

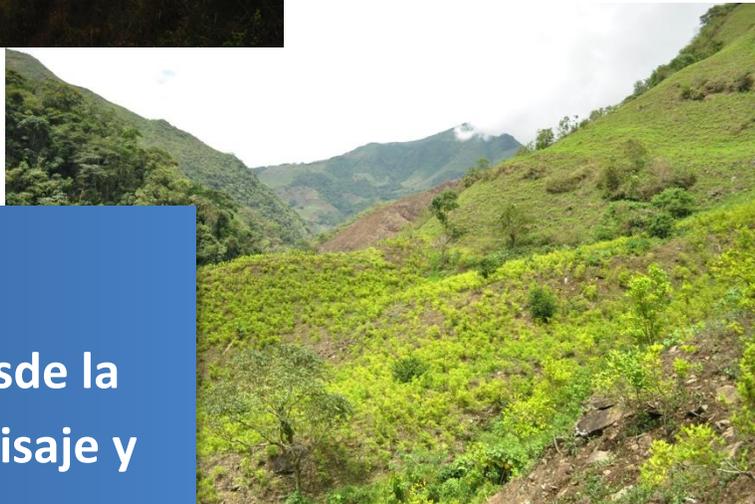
Los estudios regionales sobre el actual conflicto han subrayado la “ausencia” del Estado en un sentido material y así como en un sentido ligado a las representaciones sociales en gran parte del territorio. Múltiples estudios hicieron de esto un factor desencadenante del conflicto, con referencia a las diversas zonas de colonización, mostrando que varios actores, muchos de los cuales armados, llenaban o aprovechaban el vacío. (2004, p.26)

Puede decirse que partir de un contexto de violencia ligado a la ausencia del Estado y a necesidades básicas insatisfechas, surge un proceso social que se amarra a su territorio y a su identidad y los toma como herramientas para sobrellevar la misma vida. A través de estos hechos se hace tangible la territorialidad, concepto que mencionamos

en el capítulo uno, y a través de Montoya la contemplamos como “una acción que contempla la construcción social de entornos de sentido compartidos y que implica el proceso de producción del territorio” (2009, p.83-84). En cuanto a la importancia de las formas de resistencia vinculadas con el territorio, Pécaut menciona que “no por casualidad los fenómenos de resistencia civil que surgen en varios lugares reivindican el derecho a imponer su propia normatividad sobre territorios delimitados y sobre la base de un consenso de los habitantes” (2004, p.25)



La simultaneidad de poderes explorada desde la transformación del paisaje y las prácticas productivas: construcción de espacialidad



Cultivos de plantas de coca, de café, y huerta de pancoger, vereda El Cañón, Santa Rita, Ituango, Antioquia. Archivo personal

3. La simultaneidad de poderes explorada desde la transformación del paisaje y las prácticas productivas: construcción de espacialidad

3.1. Transformación del paisaje: relación entre la ubicación de las prácticas productivas con la presencia de agentes armados de poder

En el capítulo dos se realizó una exposición sobre los tipos de productos que son cultivados en la zona de investigación y de los usos que a estos se les da; sin embargo, es importante exponer que la presencia de estos cultivos no es homogénea, y su ubicación espacial depende en gran medida de la distancia entre las veredas y las cabeceras municipales y corregimentales principales. Si bien esta situación podría atribuirse a cuestiones climatológicas o geológicas, las razones son en realidad de carácter político, vinculadas directamente con los agentes de poder del lugar y su distribución en él. A continuación se dará un contexto que permita entender la correlación entre agentes de poder y los tipos de prácticas productivas.

A partir de la Política de Defensa y Seguridad Democrática las fuerzas armadas nacionales comenzaron a hacer presencia en casi la totalidad de los centros poblados del país, para garantizar la gobernabilidad y la seguridad de los colombianos. No obstante, en el municipio dichas garantías solo han podido hacerse efectivas en dos de las cabeceras principales: Ituango y el corregimiento de Santa Rita —y no en grandes proporciones—. La razón es que las zonas rurales de dicho municipio, para el momento en que se realizó este estudio estaban controladas por el Frente 18 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como se menciona en el capítulo anterior, situación que pone a la población en el centro del conflicto y a merced de dos agentes de poder.

A partir de esta distribución del ejercicio del poder armado entre cabeceras y zonas rurales, es posible explicar la diferenciación respecto a los tipos de cultivos que se plantan para la comercialización, ya que unos son lícitos y otros ilícitos. La lejanía o cercanía de las cabeceras e, inherentemente, de la fuerza pública posibilita que haya más o menos cultivos de coca. Sin embargo esta no es la única práctica que genera transformaciones en el entorno, ya que existen otros hábitos y prácticas productivas que intervienen sobre el paisaje de manera significativa, tales como la implementación de huertas o cría de animales, el cuidado de las cuencas, la construcción de bocatomas, el mantenimiento de los caminos, entre otros.

En los recorridos interveredales realizados se evidenció que las economías lícitas se focalizan en las veredas más cercanas al casco urbano de Santa Rita, mientras que en las más alejadas predominan los cocales. Eran visibles cultivos como la caña de azúcar, el café, el maíz y de algunos peces; esto para el caso de la vereda La Chinita, ubicada a una hora de distancia del casco urbano de Santa Rita. En la vereda El Sagrado, que queda a tres horas, el paisaje es mixto, ya que no son totalmente evidentes las plantaciones de la coca, pues los cocales están ubicados lejos de los alrededores de los caminos de herradura. Aquí también se evidencian cultivos de café, yuca y algunos cañaduzales pequeños.

El panorama cambia cuando se cruza el cañón de la quebrada La Chorrera, y se pasa de una montaña a otra para llegar a las veredas de La Polka y El Cañón, las cuales quedan a más o menos cinco horas de camino en mula desde Santa Rita. Aquí si bien existen cultivos mixtos, el más evidente es el de la coca, pues está presente alrededor de los caminos y en extensiones representativas. Este cultivo es

predominante por la misma distancia mencionada, distancia que representa la ausencia estatal en general, no sólo de las fuerzas armadas nacionales, sino de instituciones prestadoras de servicios. Como ya se ha explicado, la planta de coca es el único cultivo que en la zona genera una rentabilidad para la satisfacción de las necesidades.

Si bien las veredas que cuentan con plantaciones de coca están bajo la influencia de las FARC, la población debe asumir al mismo tiempo el influjo de los agentes estatales y las implicaciones legales y penales que conlleva manejar una economía basada en cultivos ilícitos. De modo que la comunidad debe buscar salidas a esta simultaneidad de poderes, pues la influencia por parte de los agentes armados tanto legales como ilegales pesa en gran medida sobre la vida cotidiana de los santarriteños, dado que deben cooperar para la permanencia y —en uno de los casos— para el sostenimiento de estos. Respecto a la simultaneidad de poderes y su influencia en la transformación del paisaje, Vladimir Montoya plantea que:

Los Estados de base territorial fueron definidos por la capacidad de ordenar el espacio sustentados en el monopolio de la fuerza, en la primacía de las leyes y en instituciones de poder que ejercen el control sobre el territorio. Sin embargo, es evidente que en el contexto contemporáneo esta pretensión de legitimación del Estado como la única fuente de control territorial, se ve confrontada por la coexistencia al interior de sus fronteras o incluso en espacios traslapados con otros estados, de otros territorios, de otros tipos de poderes que ejercen un dominio territorial al que no parecen dispuestos a renunciar. Esto es más que evidente en nuestra Colombia contemporánea, donde distintos poderes controlan e incluso legislan sobre el territorio (2009, p.81).

Desde la perspectiva de los grupos armados legales, la comunidad se ha convertido en foránea en su propia tierra, ya que abordan a las personas para solicitarles su identificación o una requisita, pueden perseguir a los habitantes por alguna sospecha y, en algunos casos, privarlos de su libertad. Estas acciones se presentan por el simple hecho de que vivir en el corregimiento de Santa Rita, porque “si usted es de Santa Rita es guerrillero”, un supuesto que se ha generalizado no sólo dentro de las fuerzas armadas sino en la misma población de otras partes de Ituango.

En los grupos armados ilegales, el método más generalizado para ejercer el poder es el de la coerción a través de la idea de panóptico²¹. La población siente que está bajo una constante observación y análisis, pero no se sabe bajo los ojos de quién, pues cualquiera podría ser uno de ellos. Por esta razón los habitantes hablan con cuidado y no lo hacen con cualquiera, además de que tienen restricciones en los horarios para salir y entrar, y dudan de la confiabilidad de alguien que no sea de la población.

3.2. Construcción de espacialidad

En consecuencia, frente a la estrecha relación entre la simultaneidad de poderes y el tipo de prácticas productivas que se adoptan en la zona de estudio, es clave analizar de qué manera esta dinámica produce espacio, produce procesos identitarios y otorga una forma de organización social específica. Respecto a la importancia del lugar dentro de la producción espacial, Preciado y Uc plantean lo siguiente:

[...] un elemento fundamental en la producción espacial consiste en exponer la importancia de revalorizar el “lugar” como un componente dinámico de los

²¹ Bentham [...] Plantea el problema de la visibilidad [panóptico], pero pensando en una visibilidad totalmente organizada alrededor de una mirada dominadora y vigilante. Hace funcionar el proyecto de una visibilidad universal, que actuaría en provecho de un poder riguroso y meticuloso (Varela, Julia y Álvarez-Uría, Fernando, 1977: 15)

procesos políticos, sociales y económicos [...]. En este sentido, el lugar, como productor de espacio, ha dejado de ser un escenario estático en el que los diferentes hechos se suceden, para convertir la comprensión del espacio en una forma de relación múltiple entre lugar e identidad política [...] (2010, p.74).

Y un lugar como Santa Rita se convierte en exponente privilegiado de cómo se produce espacialidad desde la interacción de unos agentes sociales y de poder específicos, que se amalgaman a raíz de unas realidades que solo son posibles en un lugar con problemáticas como la inequidad social, las necesidades básicas insatisfechas y la falta de apoyo institucional, problemáticas que están transversalizadas por economías ilícitas y agentes de poder al margen de la ley.

La población se ve presionada entonces a generar unas alternativas que les permitan sobrellevar los factores anteriormente mencionados, alternativas como las variaciones en el uso de la tierra que intervienen directamente sobre el paisaje y alternativas organizativas y de movilización que, unidas, dan como resultado una espacialidad como la que hoy habitan. Damonte, citando a Dollfus (1991, p.27), plantea que “los grupos, al interactuar, producen sociedad y al producir sociedad están produciendo espacios” (2011, p.12), y respecto a la simultaneidad de poderes y a la producción de espacialidad, Preciado y Uc anotan que:

[...] las evidencias empíricas que describen las tensiones por la definición del entramado geopolítico contemporáneo de ALyC [América Latina y el Caribe] evidencian una pugna entre los actores (y las prácticas de las que se valen) que producen las espacialidades generadoras del imaginario sobre la región. De tal manera que existe una diversificación de prácticas geopolíticas que se orientan ya sea hacia la (re)producción de representaciones dominantes, o hacia nuevos

espacios de representación (en ocasiones alternativa). Esta pugna político-espacial [es] generada por diversos discursos geopolíticos que, sin embargo, son parte de una gran imaginación regional, ya que aun frente a los diversos intereses que politizan dicha imaginación (dentro y fuera de la región), las más variadas escalas y referentes geográficos se traslapan en un espacio físico común (2010, p.67).



Un problema local mirado desde la globalidad que merece cambiar de escala para encontrar justicia. [Reflexión abierta: campesinos vs. narcos]

Tareas cotidianas de los habitantes de El Cañón, Santa Rita, Ituango, Antioquia. Archivo personal

4. Un problema local mirado desde la globalidad que merece cambiar de escala para encontrar justicia. [Reflexión abierta: campesinos vs. narcos]

A través de este texto, se ha realizado un proceso de tránsito entre las escalas de lectura territorial global, nacional y local, en las que se identifica la relación inherente entre ellas, y asimismo, se le intenta dar una mayor relevancia al lugar y a lo local como escenarios de construcción social. Se intentan contextualizar los fenómenos y problemáticas de una comunidad del corregimiento de Santa Rita, Ituango, mirándolos desde una perspectiva de lugar o de “abajo-arriba”, como diría Agnew “space is thus “top-down”, defined by powerful actors imposing their control and narratives on others. Place is the “bottom-up”, representing the outlooks and actions of more typical folk. Places can be localized when associated with the familiar”²² (2005, p. 84-85).

En este trabajo de grado, el interés sobre la lectura lugarizada se condensa en este apartado, ya que es donde se evidencia la importancia de entender y abordar situaciones desde el ojo de quien las vive, para evitar caer en determinaciones que no se ajustan a las realidades más íntimas de los lugares. Es necesario entender también, que no pueden desconocerse los contextos globales o nacionales, que, como ya se dijo, su relación es tanto inherente como necesaria, y desconocer dichos contextos sería caer en el error de invisibilizar los influjos que suceden entre ellos. En cuanto a esta relación, Sosa plantea que:

El territorio como fracción de la globalidad, hoy más que nunca, contiene relaciones globales, no solamente como relación entre un territorio y el proceso

²² Por lo tanto, el espacio es “de arriba hacia abajo”, definido por actores poderosos que imponen su control y sus narrativas a los demás. El lugar es el “de abajo hacia arriba”, que representa los puntos de vista y las acciones de la gente más normal. Los lugares pueden localizarse cuando se asocian con lo familiar. (Agnew, 2005, p.84-85) Traducción propia.

global sino como procesos, dinámicas y relaciones territoriales globalizadas al mismo tiempo que relaciones globales territorializadas. Así, y utilizando el concepto de lo glocal, que se refiere a lo global y lo local como una relación donde ambos se construyen mutuamente (aunque, como se ha visto, de forma asimétrica), el territorio es la concreción, con arraigo, de esa íntima relación y construcción. Por ejemplo, en donde poderes y procesos provenientes de lo internacional, lo transnacional y lo global que se concretan en el territorio local, le generan vínculos de imposición, dependencia o complementariedad, lo cual vulnera los ámbitos de soberanía o relativa soberanía de los Estados para normar lo local o intermediar entre lo internacional y el territorio local y nacional. (2012, p.30-31)

En cuanto a la problemática social que vive la comunidad de Santa Rita, que tiene que ver con el conflicto armado, la ausencia estatal y la satisfacción de necesidades básicas a través de una economía basada en cultivos ilícitos, es posible identificar que desde los entes gubernamentales, dicha economía es mirada desde una perspectiva global y nacional que desconoce la realidad local, y que saca de la ecuación las razones —ya descritas en apartados anteriores— por las que esta población se ve inmersa en la ilegalidad para garantizar su subsistencia. Ibán de Rementería (2004), trae a colación asuntos que se vinculan directamente a lo global y que también serían razones de peso para entender este fenómeno local, razones también invisibilizadas por los entes gubernamentales:

Los recursos naturales de las regiones tropicales que tienen condiciones edafoclimáticas para la producción de cultivos que contengan sustancias

psicoactivas —ésta es la condición necesaria—y las crisis agrícolas [...] causadas por las distorsiones de las políticas agrícolas de los países desarrollados, que vuelven ruinoso el negocio agrícola —ésta es la condición suficiente— hacen que tales recursos naturales sean disputados para actividades agrícolas y agroindustriales —alto valor agregado local— lícitas o ilícitas mediante la libre competencia en el mercado. Cuando es necesario, se emplea la violencia oficial o delincuencia y subversiva. (2004, p. 40)

A continuación, se realizará una descripción y análisis de las dinámicas que se han generado a raíz de la existencia de cultivos ilícitos siguiendo el ejercicio que ya se ha venido realizando, el cual contempla las distintas escalas de lectura. Asimismo, se realizará una reflexión sobre cómo ha afectado a la población de Santa Rita una lectura reduccionista de la realidad.

4.1. Dinámicas desprendidas del cultivo ilícito a nivel global y nacional

En primera medida se puede hablar del establecimiento del Plan Colombia como uno de los sucesos más trascendentales a raíz de la existencia de cultivos ilícitos en el país, el cual, como se mencionó en el capítulo uno, fue establecido entre Colombia y Estados Unidos en los gobiernos de Andrés Pastrana Arango y de Bill Clinton en 1999; a continuación, el Plan Colombia se extendió en los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y los de George W. Bush y Barack Obama. Los cuatro componentes principales han sido: a) la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado, b) la reactivación económica y social, c) el fortalecimiento institucional y d) los avances del proceso de paz en Colombia (Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Justicia y Seguridad, 2006, p.10).

A raíz de este acuerdo, ha ingresado un alto presupuesto al país, del 2000 al 2016 han sido US\$ 9.94 billones²³ (Semana, 2017); presupuesto que ha sido destinado al crecimiento y tecnificación de la fuerza pública, así como al equipamiento usado por esta, y, en últimas, a la implementación de la aspersion de glifosato para la erradicación de los cultivos ilícitos. Todo lo anterior en aras de la disminución del narcotráfico.

Es importante anotar que la implementación del Plan Colombia se basa en una perspectiva que establece el problema de narcotráfico y de drogas como algo mundial, por lo cual debe adoptarse “el principio de responsabilidad compartida”. Si bien este acuerdo se expone desde cuatro componentes, el que realmente ha tenido visibilidad es el primero, el de la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado.

Lo anterior se puede atribuir al hecho de que el mayor periodo de ejecución de dicho plan estuvo vinculado a la Política de Defensa y Seguridad Democrática implementada en los dos mandatos del expresidente Uribe, en la cual propuso un desempeño participativo por parte de la sociedad en la lucha que da el Estado y sus órganos de seguridad contra los grupos insurgentes y grupos armados ilegales, o dicho en términos de este Gobierno, en la lucha contra el terrorismo. A lo anterior se añade dentro de la Política de Defensa y Seguridad Democrática la relación existente entre el cultivo de la planta de coca con dichos grupos insurgentes y con el concepto de terrorismo en sí, hecho que articula la financiación del Plan Colombia con los intereses del gobierno del expresidente:

²³ De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), citada por la Revista Semana

El negocio mundial de las drogas ilícitas, que comprende las diferentes fases de cultivo, procesamiento, exportación, distribución y lavado de activos [...] se ha convertido también en la fuente primordial de recursos para la financiación de las actividades terroristas de las organizaciones armadas ilegales y en la principal amenaza para la biodiversidad de Colombia, una de las más ricas del planeta.

La disputa por el control de los cultivos de coca entre las FARC y los grupos de autodefensa ilegales determina en buena parte la geografía de la violencia en Colombia. Más de la mitad de los frentes de las FARC se encuentran en zonas de producción de coca, lo que explica su rápido crecimiento (Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, 2003, p.26).

Posterior a esta amalgama, surge la Política Nacional de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo para la Consolidación Territorial, aprobada en 2010 por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y el Departamento Nacional de Planeación. La Política de Erradicación establece que lo que se busca es

[...] mejorar la sostenibilidad e integralidad de los procesos de erradicación manual, de manera voluntaria o forzosa, convirtiéndose en una herramienta que conlleve a la consolidación territorial a partir del reconocimiento de la problemática de los cultivos ilícitos, sus efectos en las zonas de producción y los avances institucionales para abordar el fenómeno (Conpes, 2010, p.2).

Esta última surge como una forma de llevar a cabo otro de los componentes que incluye el Plan Colombia, dado que no solo habla de la erradicación, sino también del acompañamiento y desarrollo alternativo para la población que posee este tipo de

plantaciones ilícitas. Para esto se implementa el Programa de Familias Guardabosques, el cual es una propuesta de desarrollo alternativo para este tipo de población que se encuentra dentro de la economía de cultivos ilícitos. Se aplica en las zonas donde ya ha habido proceso de erradicación voluntaria y provee actividades de recuperación y manutención de áreas protegidas.

El Plan Colombia, junto con la Política de Defensa y Seguridad Democrática y la Política de Erradicación, se erigen como proyectos vinculados directamente con el contexto internacional, ya que por estar financiados en gran parte por EE. UU., deben responder a ciertas disposiciones y restricciones que desde allá se establezcan para el uso de los dineros y para el desempeño del Estado colombiano respecto a cualquier acción relacionada con estas políticas.

Otra dinámica importante que se evidenció en 2012 desde la escala nacional fue el proyecto de despenalización de cultivos ilícitos presentado por el congresista Hugo Velásquez del Partido Liberal. Si bien no obtuvo el aval del Gobierno Nacional, fue presentado ante la Cámara y superó el primer debate. El Gobierno argumenta que esta iniciativa desconoce los acuerdos internacionales del país en los que se establece la persecución a la producción y el tráfico de estupefacientes.

Según la propuesta, se “busca prohibir las aspersiones aéreas como mecanismo para erradicar los cultivos ilícitos, y obliga al Estado a implementar programas de asistencia agropecuaria a los campesinos que decidan sustituir los cultivos ilícitos” (Semana, 2012, 9 de mayo). También se incluye el establecimiento de instrumentos para prevenir el consumo, y que se considere la adicción como una enfermedad que necesita de tratamiento médico.

Desafortunadamente, en el mes de octubre del mismo año, la propuesta fue desestimada en el segundo debate de la Cámara de Representantes, pero su autor planteó que continuará trabajando para que este proyecto resulte. Algunas de sus apreciaciones fueron: “Buscábamos hacer justicia con gentes humildes que se han dedicado a los cultivos ilícitos para sobrevivir”, “un narcotraficante tiene la misma pena que quien cultiva”, y por esa razón lo que se buscaba era que “sin dejar que se mantenga la erradicación de cultivos manualmente por cualquier procedimiento, no sea encarcelada la gente” (El Espectador A, 2012, 24 de octubre).

Otros aspectos señalados por el congresista fueron la cantidad de pequeños cultivadores que hoy se encuentran penalizados con penas del talante de un narcotraficante, y que lo que se buscaba no era legalizar la droga, “sino dar una solución social a miles de familias colombianas que se han visto obligadas a acudir a esta práctica para sobrevivir, debido al abandono del Estado en regiones apartadas del país” (El Espectador B, 2012, 24 de octubre).

4.2. Dinámicas desprendidas del cultivo ilícito a nivel local

En el ámbito local, las dinámicas expuestas anteriormente han generado un efecto látigo de gran envergadura, trascendiendo sobre la vida cotidiana de campesinos que, como cualquier otro, buscan subsistir en medio de un mar de inequidades e invisibilizaciones.

En la localidad de Santa Rita, a partir de la mencionada Política de Defensa y Seguridad Democrática, hace unos dieciséis años llegó la fuerza pública a la cabecera, hecho que influyó enormemente sobre sus modos de vida, ya que tuvieron que asumir

nuevamente la simultaneidad de poderes²⁴, y con ello la estigmatización de ser “unos guerrilleros más” por el simple hecho de costear sus necesidades a partir de la producción de coca. Frente al tema de la estigmatización Guerrero plantea que

Así, vemos que en situaciones de dominación, la heteroidentidad o la identidad externa que nos atribuyen los otros, está marcada por la discriminación y la exclusión, lo que tendrá un impacto profundo en las representaciones que construimos sobre nosotros, o sea, en nuestra autoidentidad o mismidad. [...] Por eso encontramos que en situaciones de dominación pueden darse expresiones de identidad negativa, que van a conducir a un grupo o a algunos de sus miembros a sentir vergüenza, desprecio y negación de sí mismos, como consecuencia de la interiorización de la imagen empobrecida que los otros les atribuyen [...]. (Guerrero, 2002, p. 120)

De este modo, tuvieron que intervenir y afianzar sus procesos identitarios, organizativos y de trabajo comunitario para la movilización y la resistencia a la injusticia. Se movilizaron para enfrentar lo que trajo el Plan Colombia con la erradicación por aspersión de glifosato, se movilizaron para defender la salud de su territorio y de su misma familia; para exigir una erradicación manual y con garantías de economías alternativas.

La llegada de la fuerza pública también los obligó a asumir una gran cantidad de restricciones en cuanto a la adquisición de bienes y servicios a raíz de la misma estigmatización. Se ven restringidos en la adquisición y el transporte de elementos que pueden ser comprados y usados por cualquier colombiano de manera libre, sin

²⁴ Antes fueron paramilitares vs. guerrilla, hoy es fuerza pública vs. guerrilla.

embargo, por habitar este lugar, no reciben el beneficio de la duda e inmediatamente se les relaciona con el procesamiento de la pasta base de coca; productos como la gasolina, el cemento (Gallo, 2012, 19 de noviembre), los abonos y los pesticidas, entre otros. Todos ellos tuvieron que asumir también lo que implica la simultaneidad de poderes en términos de conflicto armado: los innumerables enfrentamientos que ponen a la población como barricada.

4.3. Cultivo y campesino desde lo local vs. narcotráfico y narcotraficante desde lo global

Es importante mencionar la importancia que existe respecto a la diferenciación de las escalas de lectura local y global y cómo cada una de ellas influye sobre el funcionamiento de la otra, caso específico, los efectos adversos de la lectura global sobre fenómenos locales, desde donde se generan estigmas, interpretaciones erróneas, e injusticias. A este respecto, Damonte anota que: “Es claro que la política global influye en las dinámicas sociales locales, sobre todo en contexto de dominación, así como las prácticas locales pueden influir en dinámicas globales [...]” (2011, p.13).

Evidenciadas las dinámicas entre de las diferentes escalas, es necesario hacer hincapié en la diferenciación que debe dársele al campesino que cultiva la planta de coca para su subsistencia, respecto al narcotraficante que la procesa, la transporta y la vende. Si bien desde la perspectiva global y nacional se evidencia el cultivo como el primer eslabón que potencia todo un entramado de ilícitos y de financiamiento de agentes insurgentes e ilegales —además de verse como generador del problema de salud pública relacionado con el consumo de estupefacientes—, se hace injusto desvincular los actores de ese primer eslabón del contexto en el cual se desenvuelven,

el cual es de subsistencia y de búsqueda de satisfacción de las necesidades, para homogenizarlos con aquellos que realmente se encuentran inmersos en este negocio por el poder político, militar o adquisitivo. Es inconcebible que también se les iguale con aquellos agentes armados al margen de la ley, y que, con la excusa de que “son ricos” porque cultivan la planta de coca, no precisen del apoyo y del acompañamiento institucional en sus poblaciones. El mismo representante de la ODCCP para las Naciones Unidas, Klaus Nyholm, se refiere a la importancia de diferenciar un campesino de un narcotraficante y de los efectos adversos que trae el hecho de medirlos con el mismo rasero:

no sería sincero negar la importancia de la represión antidroga —cuando se trata del tráfico mismo, del lavado de activos, de los laboratorios y de las grandes plantaciones de coca, no hay otra opción—: los dueños de las grandes plantaciones y sus amigos traficantes no se dejan seducir por el desarrollo alternativo. Y las grandes plantaciones representan la mitad de la coca en Colombia. Pero cuando se trata del pequeño cocalero —sea éste campesino, colono o indígena—, es diferente. No es un delincuente, pero es alguien que carece de alternativas. En este caso el garrote es injusto, y además no funciona. [...] Debemos —el Estado y la comunidad internacional— ofrecerle una alternativa real: desarrollo alternativo. (2004, p.623)

Se hace injusto que, además de ser estigmatizados como narcotraficantes, los campesinos tengan que sobrellevar el ser judicializados y penalizados como si se estuvieran enriqueciendo como uno de aquellos; penalizados por ese mismo cuerpo institucional que previamente los ha abandonado, dejándolos a la deriva y por la

necesidad viéndose obligados a producir esta planta. El mismo congresista Hugo Velásquez identifica este cúmulo de injusticias en su propuesta de despenalización al expresar que:

Lo que no se puede hacer es encarcelar a la gente, ya que en este caso la mayoría es campesina, colonos, personas desplazadas y agricultores quebrados porque en el país no ha habido una política agropecuaria responsable y eso ha obligado a que, más por necesidad que por cualquier otro interés, esos sectores que trabajan el campo y que son pobres, acudan a los cultivos ilícitos, pero apenas para sobrevivir (El Espectador B, 2012, 24 de octubre).

Es hipócrita además, porque mientras estos territorios se ven sometidos a todo tipo de extorsiones, devastaciones y persecuciones, “porque producen la materia prima de los principales agentes psicoactivos ilícitos, [...]” (Escohotado, 1997), en estos mismos territorios es “donde actualmente son vendidos en masa los agentes psicoactivos lícitos, desde el tabaco y el alcohol a estimulantes y sedantes patentados (Escohotado, 1997).

Es necesario entonces manifestar cómo afecta la lectura deslugarizada y alejada de la realidad la vida de los campesinos que cultivan la planta de coca, pues dados los resultados que debe dar el Gobierno Nacional a los EE. UU. a raíz del Plan Colombia, el país llena sus estadísticas con estos campesinos de a pie, “demostrando” cómo la inversión exterior ha dado resultado con la disminución del narcotráfico. Con respecto a esto, Velásquez agrega que

[...] en las cárceles del oriente del país (Vichada, Guaviare y Meta) hay más de 22 mil personas detenidas por cultivos ilícitos que figuran globalmente como

narcotraficantes y no lo son. Ellos son pequeños cultivadores que no exceden las 3 hectáreas. El Estado colombiano a través de la policía y la justicia se acostumbró a llenar estadísticas con los pequeños cultivadores, con los raspachines²⁵, con el núcleo familiar porque estos agricultores que se dedican a estas actividades siempre están con el núcleo familiar, con la esposa y los hijos y ellos son los que terminan apresados (El Espectador B, 2012, 24 de octubre).

Por último, se hace referencia a Preciado y Uc para evidenciar la importancia de entender desde la geopolítica crítica las transformaciones que ha tenido el conocimiento geográfico, el cual los “intelectuales del Estado” convierten en un razonamiento geopolítico reduccionista que lleva los lugares a “abstracciones geográficas que requieren ser domesticadas, controladas, invadidas o bombardeadas [...]” (2010, p.80), obviando las particularidades que configuran un territorio y un lugar. Los autores también evidencian entonces el valor de la contextualización, de la lectura desde lo local de dichos lugares, aspecto que se ha intentado defender y resaltar en este capítulo:

[...] el razonamiento geopolítico neoconservador trabaja en la activa supresión de la complejidad específica de los lugares, para convertirlos en abstracciones geopolíticas controlables. Este reduccionismo conduce a la construcción de tierras incógnitas, a la supresión de espacios y actores políticos, a la desestabilización de regímenes democráticos, a la criminalización de territorios para la apropiación de recursos naturales, etc. (Preciado y Uc, 2010: 80)

²⁵ Los raspachines son las personas que se encargan de deshojar la planta de coca manualmente.

En contextos tan adversos, en los que no es posible echar mano de nada, las mismas comunidades deben ser las artífices de sus propias realidades, y en este sentido, la identidad puede ser asumida como un instrumento insurgente contra el poder (Guerrero, 2002): “La identidad, como estrategia, permite ver las respuestas desde los actores societales y su capacidad de provocar efectos sociales mediante sus acciones y la reflexión sobre las mismas” (Guerrero, 2002, p. 120).

Para finalizar, se quiere enfatizar en la necesidad de “volver al campo”, es decir, que toda normativa, política pública o intervención a las comunidades se haga no sólo partiendo de agendas políticas nacionales o globales, sino desde las mismas poblaciones. Si algo puede rescatarse del abandono institucional que ha sufrido la comunidad de Santa Rita, específicamente de la vereda El Cañón, es que éste ha posibilitado que su gente se empodere de su entorno, que genere alternativas para compensar sus necesidades y se organice para resistir a los cambios. En este sentido, es una sociedad que ha aprendido de su territorio y lo conoce, ha aprendido a autorregularse y tiene claro cuáles son los caminos a seguir para mejorar sus condiciones de vida. Esto es una invitación a las diferentes entidades que representan el Estado, para que los esfuerzos que estas comunidades realizan, de salud pública relacionado tengan mayor fuerza a través su acompañamiento real y no sólo desde textos escritos sin aplicabilidad.

5. Referencias bibliográficas

Agencia Prensa Rural. (2011, 30 de abril). *Condenados a 26 años de cárcel once militares por ejecución extrajudicial*. Agencia Prensa Rural. Recuperado de: <http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article5760>

Agnew, John. (2005). *Space: Place*. En: *Spaces Of Geographical Thought. Deconstructing Human Geography's Binaries*. Sage publications: Paul Cloke y Ron Johnston, 2005. p. 81-96.

Ampuero, Igor; Brittain, James J. (2008). *La cuestión agraria y la lucha armada en Colombia*. En publicación: *Recuperando la tierra. El resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América Latina*. Sam Moyo y Paris Yeros [coord.]. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2008. ISBN 978-987-1183-85-2
Recuperado de <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/sursur/moyo/17AmBri.pdf>

Anteproyecto Plan de Desarrollo Ituango 2012-2015 “el compromiso es de todos y todas”. (2012). Ituango, Antioquia. Recuperado de: <http://www.antioquia.gov.co/>

Arboleda García, Javier. (2008, 21 de octubre). *Las cicatrices de El Aro*. Semana. Recuperado de: <http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/cicatrices-aro/116851.aspx>

Asmedas (2011, 24 de febrero). *Campesinos insisten en frenar erradicación de coca*. Asociación Médica Sindical Colombiana Seccional Antioquia. Recuperado de: En: <http://www.asmedasantioquia.org/ws/noticias/derechos-humanos/1217-campesinos-insisten-en-frenar-erradicacion-de-coca>

Asociación de Comerciantes de Ituango ASCOMI. (2012, 28 de agosto). *23 personas capturadas en Ituango después de cinco redadas y allanamientos ilegales*. Agencia Prensa Rural. Recuperado de: <http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article9000>

BBC Mundo (2003, 8 de julio). *Colombia: "paras" contra la extradición*. BBC Mundo. Recuperado de: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3056000/3056652.stm

Blanco, Jorge (2007). *"Espacio y territorio: elementos teórico conceptuales implicados en el análisis geográfico"*. En María Victoria Fernández y Raquel Gurevich (coords.), *Geografía: nuevos temas, nuevas preguntas. Un temario para su enseñanza* (pp. 37-64). Buenos Aires: Editorial Biblos.

Buriticá Céspedes, Pablo (2010). *La roya del cafeto en Colombia: realizaciones de impacto nacional e internacional en el siglo XX*. Rev. Fac. Nac. Agron. Medellín, volumen 63, Número 1, p. 5285-5292, 2010. ISSN electrónico 2248-7026. Recuperado de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/refame/article/view/24949/36983>

Cadena Montenegro, José Luis. (2004). *La geografía y el poder. Territorialización del poder en Colombia -el caso de las FARC- de Marquetalia al Caguán*. Estudios Políticos. México. Enero-abril.

Caracol Radio. (2011, 7 de noviembre). *Capturan a explosivista de las Farc en zona rural de Ituango, Antioquia*. Caracol Radio. Recuperado de: <http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/capturan-a-explosivista-de-las-farc-en-zona-rural-de-ituango-antioquia/20111107/nota/1574151.aspx>

Castillo, Sergio. (2010, 4 de abril). *Ayudas para familias desplazadas por las Farc en Ituango- Antioquia*. Radio Santa fe. Recuperado de: <http://www.radiosantafe.com/2010/04/04/ayudas-para-familias-desplazadas-por-las-farc-en-ituango-antioquia/>

Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES. (2010). *Política Nacional de Erradicación de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo Para la Consolidación Territorial*. Recuperado de: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3669.pdf>

Damonte, Gerardo. (2011). *Construyendo territorios: narrativas territoriales aymaras contemporáneas*. Lima: GRADE; CLACSO.

Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Justicia y Seguridad. (2006). *Balance Plan Colombia 1999-2005*. p, 1-43. Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DJS/DJS_Documentos_Publicaciones/Bal_plan_Col_espanol_final.pdf

De Rementería, Ibán. (2004). *La guerra en Colombia: un conflicto por el uso alternativo de los recursos naturales*. En Dimensiones territoriales de la guerra y la paz. (pp. 37-43) Bogotá, D.C, Colombia. Universidad Nacional de Colombia.

Dollfus, Olivier. (1991). *Territorios andinos: reto y memoria*. Lima: IFEA.

El Espectador A. (2012, 24 de octubre). *Despenalización de cultivos ilícitos se hundió*. El Espectador. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-383088-despenalizacion-de-cultivos-ilicitos-se-hundio>

El Espectador. (2016, 4 de febrero). *“El nuevo capítulo del Plan Colombia se llamará Paz Colombia”: Obama*. El Espectador. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/noticias/politica/el-nuevo-capitulo-del-plan-colombia-se-llamara-paz-colo-articulo-614763>

El Espectador. (2013, 2 de marzo). *La Crisis Cafetera*. Eduardo Sarmiento. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/opinion/crisis-cafetera>

El Espectador B. (2012, 24 de octubre). *Quienes siembran cultivos ilícitos no son delincuentes: Partido Liberal*. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-383067-quienes-siembran-cultivos-ilicitos-no-son-delincuentes-partido-l>

Escohotado, Antonio. (1997). *La prohibición: principios y consecuencias*. Versión original publicada en *Drogas, hegemonía do cinismo de Melo Ribeiro M. y Seibel S. Memorial*, San Pablo, 1997. Recuperado de <http://www.escohotado.com/articles/laprohibicionprincipiosyconsecuencias.htm>

Fajardo Montana, Darío. (1994). *La colonización de la Frontera agraria colombiana*. En: *El agro y la cuestión social*. Minagricultura 80 años. Bogotá. Tm Editores.

Fals Borda, Orlando. (2000). *El territorio como construcción social*. Revista Foro, número 38, p. 45-51.

Gallo, Carlos. (2012, 19 de noviembre). *A propósito de la prohibición y restricción de la venta de cemento en Ituango* [Web log post]. Recuperado de: <http://ituangotierradepaz.blogspot.com/2012/11/a-proposito-de-la-prohibicion-y.html>

Gramsci, Antonio. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*, Wishart, Londres, (comp. y trad. de Quinten Hoare y Geoffrey Nowell Smith). p. 333.

González Cruz, Francisco. (2009). *Desarrollo humano sustentable local*. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Volumen 8, Nº 22, 2009, p. 53-66.

González Cruz, Francisco. (2004). *Lugarización, globalización y gestión local*. Polis [En línea], 7 [2004, Puesto en línea el 07 septiembre 2012, consultado el 11 octubre 2012. Recuperado de: URL: <http://polis.revues.org/6222>; DOI: 10.4000/polis.6222

González, Fernán, Bolívar, Ingrid y Vásquez, Teófilo. (2003). *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado*. Bogotá, Cinep.

Hoyos, Miriam. (2006). *Poblamiento y colonización campesina, el caso del área amortiguadora en el Nudo de Paramillo, Ituango, 1875-2004*. Tesis de pregrado, Medellín, Universidad de Antioquia, Departamento de Historia.

Human Rights Watch. (2005). *Las apariencias engañan. La desmovilización de grupos paramilitares en Colombia*. Agosto 2005 Vol. 17, No. 3 (B).

Human Rights Watch. (2002). *Un giro erróneo: La actuación de la Fiscalía General de la Nación*. Noviembre 2002 Vol. 14, N° 2(B).
http://hrw.org/spanish/informes/2002/giro_erroneo.html

Madariaga Villegas, Patricia. (2006). *Matan y matan y uno sigue ahí; Control paramilitar y vida cotidiana en un pueblo de Urabá*. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología, CESO. Bogotá, Ediciones Uniandes.

Massey, Dooren. (2004). *Lugar, identidad y geografías de la responsabilidad en un mundo en proceso de globalización*. Revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Volumen 57, p. 77-84.

Monroy, Juan Carlos. (2011, 9 de octubre). *Un espiral de coca, protestas y carencias*. El Colombiano. Recuperado de:
(http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/U/un_espiral_de_coca_protestas_y_carencias/un_espiral_de_coca_protestas_y_carencias.asp)

Montoya, Vladimir. (2009). *Espacio e identidad: sobre el sentido del lugar y la idea de la territorialidad*. Cátedra Abierta, Universidad de Antioquia. ISSN: 2011-2513, Editorial Universidad de Antioquia, Volumen 1, fascículo 1, p 79-91.

Nyholm, Klaus. (2004). *Cultivos ilícitos y desarrollo alternativo*. En Dimensiones territoriales de la guerra y la paz. (pp. 621-624) Bogotá, D.C, Colombia. Universidad Nacional de Colombia.

Pécaut, Daniel. (2004). *Hacia la desterritorialización de la guerra y de la resistencia a la guerra*. En Dimensiones territoriales de la guerra y la paz. (pp. 23-36) Bogotá, D.C, Colombia. Universidad Nacional de Colombia.

Plan Básico de Ordenamiento Territorial. (2008). Municipio de Ituango, Antioquia. Recuperado de <http://www.ituango-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20B%C3%A1sico%20de%20Ordenamiento%20Territorial%20Municipio%20de%20Ituango.pdf>

Preciado Coronado, Jaime; Uc, Pablo. (2010). *La construcción de una geopolítica crítica desde América Latina y el Caribe. Hacia una agenda de investigación regional*. Revista Geopolítica(s), volumen 1, número 1, p, 65-94. ISSN: 2172-3958.

Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional. (2003). *Política de Defensa y Seguridad Democrática*. Recuperado de: <http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf>

Reguillo, Rossana. (2000). *La clandestina centralidad de la vida cotidiana*. En La vida cotidiana y su espacio-temporalidad. Alicia Lindón, Coord. Barcelona: Anthropos. p. 77-93.

Restrepo, Eduardo. (2007). *Identidades: planteamientos teóricos y sugerencias metodológicas para su estudio*. Revista Jangwa Pana, julio de 2007, No.5, p. 24-35, ISSN: 1657-4923.

Reyes Posada, Alejandro. (2009). *Guerreros y Campesinos, El Despojo de la Tierra en Colombia*. Editorial Norma.

Scott, C, James (2000). *Los dominados y el arte de la resistencia*. México. Ediciones Era, S.A de C.V.

Semana. (2007, 22 de septiembre). *El gobierno está legalizando a los narcos*. Semana. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/el-gobierno-esta-legalizando-narcos/88375-3>

Semana. (2012, 21 de abril). *Los campesinos que no quieren cacao*. Semana. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/campesinos-no-quieren-cacao/175881-3.aspx>

Semana. (2012, 9 de mayo). *Sin aval del gobierno, aprueban despenalización de cultivos ilícitos*. Semana. Recuperado de: <http://www.semana.com/politica/aval-del-gobierno-aprueban-despenalizacion-cultivos-ilicitos/176919-3.aspx>

Semana. (2017, 7 de septiembre). *El recorte de Trump a Colombia tambalea en el Senado gringo*. Semana. Recuperado de: <http://www.semana.com/mundo/articulo/el-recorte-de-trump-a-colombia-tambalea-en-el-senado-gringo/539294>

Semana. (2018, 3 de junio). *Las razones para declarar La Granja, El Aro y Jesús María Valle como crímenes de lesa humanidad*. Semana. Recuperado de: <https://www.semana.com/nacion/articulo/las-razones-para-declarar-la-granja-el-aro-y-jesus-maria-valle-como-crímenes-de-lesa-humanidad/569898>

Sosa Velásquez, Mario (2012). *¿Cómo entender el territorio?* Editorial Belinda Ramos Muñoz. – Guatemala: URL; Editorial Cara Parens, 2012. xi, 131 p. (Colección Documentos para el debate y la formación, No. 4) ISBN: 978-9929-54-002-6

Tapias Hernández, César Augusto. (2010). *Fumando mañas. Construcción del sentido de la realidad social en un contexto de ilegalidad.* Bogotá. Editorial Universidad del Rosario.

U.S Department of State. (2001, 1 de septiembre). *Designation of the AUC As a Foreign Terrorist Organization.* U.S Department of State. Recuperado de: <https://2001-2009.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2001/4852.htm>

U.S Department of State. (2002, 24 de septiembre). *United Self-Defense Forces of Colombia (AUC) Indictment.* U.S Department of State. Recuperado de: <https://2001-2009.state.gov/p/inl/rls/rm/13663.htm>

Varela, Julia; Álvarez-Uría, Fernando. (1977). *Genealogía del poder.* Las ediciones de La Piqueta. ISBN 84-7443-024-0

Vásquez, María de la Luz. (2006). *De repúblicas independientes a zona de despeje. Identidades y Estado en los márgenes.* En: *Identidades culturales y formación del Estado en Colombia: colonización, naturaleza y cultura/* Ingrid Bolívar. Bogotá: Ediciones Uniandes.

Veillette, Connie. (2005). *Plan Colombia: A progress Report, june 22, 2005.* CRS Report of congress. Recuperado de: <http://fpc.state.gov/documents/organization/43875.pdf>

Vidas silenciadas. (2017). *Base de datos de víctimas silenciadas por el Estado en Colombia.* Recuperado de <https://vidassilenciadas.org/victimas/16877/>